

Mayo 26 de 1973

2ª REUNION — 1ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor VICENTE SOLANO LIMA

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
ANGELOZ, Eduardo César
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CACERES, Rubén Osvaldo
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARNEVALE, Luis
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CHALE, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Américo Alberto
GARCÍA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HERRERA, José Jorge
JAUREGUI, Rafael Zenón

LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
LOSADA, Mario
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.
MARTÍNEZ, Julio César
MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MUNIAGURRIA, Camilo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elías
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VAI, Buenaventura Justo
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa
VIVAS, Ángel Juan Gregorio

AUSENTES CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
ZARRIELLO, Raúl J.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se amnistian delitos políticos, sociales, gremiales y estudiantiles. (Página 69.)
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre derogación de normas penales. (Página 71.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre garantías procesales y de ejecución penal. (Página 72.)
- IV.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 73.)
- V.—Comunicaciones oficiales. (Página 73.)
- VI.—Peticiónes particulares. (Página 74.)
- VII.—Proyecto de comunicación del señor senador León sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República de Cuba. (Página 74.)
- VIII.—Proyecto de ley de los señores senadores Solari Yrigoyen, Lorenzo (J.L.), Angeloz, Cáceres, De la Rúa y Nápoli sobre denominación de las leyes dictadas a partir del 28 de junio de 1966. (Página 74.)
- IX.—Proyecto de resolución de los señores senadores León, Cáceres y Losada por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre aprovechamiento de ríos internacionales. (Página 75.)
- X.—Proyecto de ley del señor senador Cërro sobre amnistía por delitos políticos. (Página 76.)
- XI.—Proyecto de declaración de los señores senadores De la Rúa, Zarriello, Perette y Solari Yrigoyen sobre designación de magistrados judiciales. (Página 78.)
- XII.—Proyecto de ley de los señores senadores Mancini, Vivas y Frugoli sobre amnistía por delitos políticos. (Página 78.)
- XIII.—Proyecto de ley de los señores senadores Saadi y Herrera (D.F.L.) sobre nulidad de las condenas dictadas por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. (Página 79.)
- XIV.—Proyecto de ley de los señores senadores Fonrouge y Paz sobre amnistía por delitos políticos. (Página 80.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Penisi sobre amnistía por delitos políticos. (Página 81.)
- XVI.—Proyecto de declaración del señor senador Martiarena y otros señores senadores sobre amnistía en el ámbito provincial y municipal. (Página 87.)

XVII.—Proyecto de ley del señor senador Perette y otros señores senadores sobre amnistía por delitos políticos. (Página 88.)

XVIII.—Proyecto de ley del señor senador Perette y otros señores senadores sobre derogación y modificación de normas penales. (Página 89.)

2.—A moción del señor senador Martiarena, se resuelve considerar sobre tablas y con preferencia los proyectos a que se refieren los puntos I, II y III de este sumario. (Página 97.)

3.—Diplomas de senadores suplentes electos. (Página 97.)

4.—Manifestaciones sobre plan de labor. (Página 97.)

5.—Consideración en general de los proyectos de ley a que se refieren los puntos I, II y III de este sumario. Se aprueba con modificaciones el proyecto del punto I. (Página 98.)

6.—A moción del señor senador Allende, se resuelve considerar sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Martiarena y otros señores senadores sobre amnistía en el ámbito provincial y municipal. (Página 124.)

7.—Consideración del proyecto de declaración a que se refiere el punto XVI de este sumario. Se aprueba. (Página 125.)

8.—Consideración en particular del proyecto de ley a que se refiere el punto II de este sumario. Se aprueba con modificaciones. (Página 125.)

9.—Consideración en particular del proyecto de ley a que se refiere el punto III de este sumario. Se aprueba con modificaciones. (Página 126.)

10.—Manifestaciones. (Página 127.)

11.—Integración de comisiones. (Página 127.)

12.—Fijación de días y horas de sesión del Honorable Senado. (Página 127.)

13.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 128.)

—En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de mayo de 1973, a la hora 16 y 40, dice el

Sr. Presidente. — Con la presencia de cincuenta y seis señores senadores, queda abierta la sesión.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Como aún no han sido integradas las comisiones permanentes de la Honorable Cámara, los asuntos que debieran ser girados a ellas quedarán retenidos en Secretaría.

- c) En las causas concernientes a militares, en trámite ante los tribunales castrenses o sentenciados por éstos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas;
- d) En las causas referentes a delitos o infracciones imputados a civiles que se hallaren en trámite ante consejos de guerra o comandantes militares, o hayan sido sentenciados por éstos, la Cámara Federal de la jurisdicción donde se cometió el hecho;
- e) En las causas en trámite ante tribunales provinciales, o sentenciadas por éstos, los órganos que correspondan con arreglo a las normas locales.

- II) Presentada la petición por el interesado o sus representantes dará comienzo el trámite el mismo día de la solicitud. Sin perjuicio de ello el tribunal actuará de oficio cuando prima facie el caso encuadre en las previsiones de esta ley.
 - III) Si la causa se hallase en un tribunal desprovisto de competencia o en poder de funcionarios administrativos, presentada la petición por el interesado o sus representantes serán remitidas las actuaciones al órgano judicial competente en el plazo de veinticuatro (24) horas, pudiendo también efectuarse la remisión de oficio.
 - IV) El tribunal competente resolverá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, previa vista por veinticuatro (24) horas al ministerio público y luego, por el mismo plazo, a la defensa, si ésta lo solicitare. Se podrá ofrecer prueba al realizar las peticiones, y ella será producida dentro de tercero día.
- Contra la resolución del tribunal procederá recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será otorgado al mero efecto devolutivo cuando el a-quo haya declarado que procede la amnistía. Cuando la resolución fuere de negatoria, la causa será elevada de oficio en apelación a la Corte Suprema de Justicia dentro del quinto día.
- V) Son hábiles a los efectos de la aplicación de esta ley todos los días y horas.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Esteban Justo Antonio Righi. — Antonio Juan Benítez.

II

Derogación de normas penales. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 25 de mayo de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

En cumplimiento del plan de restablecimiento de las instituciones del estado de derecho en que se halla empeñado el Poder Ejecutivo, tengo el honor de remitir a vuestra honorabilidad el presente proyecto de derogación de normas penales que por razón de su origen, y frecuentemente también de su materia, son violatorias de principios constitucionales.

Es sabido que lamentablemente los tribunales no han tenido una posición clara de rechazo de la validez de estas normas y las nuevas circunstancias que se desprenden de la instalación de un gobierno legítimo

darán lugar —de no mediar una ley como la presente— a situaciones de inseguridad respecto de la aplicación de estas prescripciones.

Creo prudente poner de manifiesto que en algunos temas las prescripciones contenidas en las reformas que se derogan se han referido a problemas que requieren una solución, como por ejemplo la usura, el desbaratamiento de derechos acordados, la administración fraudulenta y la insolvencia fraudulenta. De ello no debe inferirse que la derogación que se propone implicaría una disminución de la protección de los bienes jurídicos pertinentes, pues en realidad, las dificultades técnicas a que dan lugar las respectivas prescripciones no permitieron que el efecto preventivo que con ellas se deseaba haya sido alcanzado.

De todos modos se propone la ratificación de los artículos 173, incisos 7º y 11, 175 bis y 179 (segundo párrafo) que se incorporaron al Código Penal por la llamada ley 17.567, pero con conciencia de la reforma que estas prescripciones requieren para adquirir verdadera practicidad.

Como lo ha expresado el Poder Ejecutivo en el mensaje del 25 de Mayo del corriente la reforma penal se llevará a cabo en varios tiempos.

El primero consiste en el restablecimiento de los principios del estado de derecho en este ámbito legislativo y a ello se dirige el presente proyecto de ley.

Desde el punto de vista técnico-legislativo el proyecto se basa en una fórmula doble: por un lado expresa en forma conceptual las reglas y normas que deroga, por otro enumera —en forma meramente ejemplificativa— los más importantes instrumentos a los que priva de toda eficacia.

Desde otro ángulo el proyecto propone sólo medidas de suma urgencia para cubrir vacíos que realmente ocasionarían trastornos.

Así por ejemplo propone ratificar el criterio de actualización de las escalas penales de la multa adoptado por la llamada ley 17.567, pues de no hacerlo así perdería sentido preventivo general la pena de multa y ello alteraría sensiblemente el sistema de reacciones penales que contiene el Código Penal.

Por otra parte se propone la ratificación de ciertos tipos penales creados en leyes especiales y que no tienen paralelo en el Código Penal, como es el caso de las normas que han regido el control de cambios.

Asimismo parece prudente mantener previsiones relativas a la seguridad del tráfico aéreo y teniendo en cuenta la naturaleza internacional e interjurisdiccional que el delito tiene. La Argentina ha suscripto en este sentido la Convención de La Haya del 16 de diciembre de 1970 y no puede desconocerse que hay razones suficientes que hacen necesario incorporar a nuestra legislación una previsión que es ya derecho positivo en casi todo el mundo.

La propuesta se completa proponiendo que el Parlamento encomiende al Poder Ejecutivo formar una comisión de juristas y criminólogos para someter nuestro derecho penal a una revisión y puesta al día. El procedimiento es tradicional en nuestra vida legislativa y su primer antecedente es ya la ley 36 de 1863 como consecuencia de la cual fue designado Carlos Tejedor para redactar el primer proyecto de Código Penal.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Héctor J. Cámpora.
Esteban Justo Antonio Righi. — Antonio Juan Benítez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la entrada en vigencia de esta ley perderán toda eficacia las disposiciones por las que se hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional, cualquiera sea el nombre que se le haya dado al acto legisferante por el que se las dictó. Aclárase que recuperan su vigencia las normas en vigor al momento de dictarse las que pierden ahora eficacia.

Art. 2º — Quedan expresamente comprendidas en los términos de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º, las llamadas leyes 17.567, 18.953, 17.401, 18.234 y decretos 8.329/67, 18.235, 17.671, 17.649, 17.192, 18.984, decreto 2.345/71 y 19.797.

Art. 3º — Las escalas penales en los delitos del Código Penal reprimidos con pena de multa se aumentará a la cantidad que resulta de multiplicar por cien en los mínimos y por ciento cincuenta en los máximos.

Art. 4º — Conviértense en ley de la Nación las siguientes disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo de facto entre el 26-6-66 y el 24-5-73.

1) Artículos 173, inciso 7º, y 11 y 179 (segundo párrafo); 190, 194 y 198, establecidos en el Código Penal por la llamada ley 17.567 y 175 bis, sancionado por la llamada ley 18.934.

2) Decreto ley (llamado «ley») 19.359 y 20.184.

3) Decreto ley (llamado «ley») 17.250, artículos 7º, 17, 18, 19, 20 y 21.

4) Decreto ley (llamado «ley») 18.247, artículos 26, 27 y 28.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo formará una comisión reformadora de las leyes penales en la que dará representación a las Cámaras del Congreso, al Poder Judicial, a las universidades e institutos científicos dedicados a la materia y a los abogados, sin perjuicio de sus propios representantes.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Esteban Justo Antonio Righi. — Antonio Juan Benítez.

III

Garantías procesales y ejecución penal. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 25 de mayo de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

En el mensaje dirigido a vuestras honorabilidades acompañando el proyecto de ley de amnistía, el Poder Ejecutivo ha expresado los fundamentos por los cuales estima inadecuada para la política de pacificación nacional, en que está empeñado, la hipertrofia del sistema represivo penal.

Del mismo modo, debe volver a sus cauces normales la administración de justicia federal, a la que, por primera vez desde su creación, se ha añadido una comisión especial para juzgar los delitos contra los poderes públicos.

Este organismo se caracteriza por particularidades bien definidas, a saber: primeramente, la selección de sus integrantes mediante normas distintas de las que se aplican a la generalidad del Poder Judicial; en segundo término, los delitos políticos cuya represión le está confiada tienen sus sanciones incrementadas por encima de lo que requiere una razonable prevención general; por último, el procedimiento estable-

cido adolece de una simplificación exagerada de las formas y tiene plazos demasiados angustiosos para el cumplimiento de los actos más importantes de juicio.

Las tres notas señaladas constituyen, según la doctrina, las características más comunes de los organismos jurisdiccionales extraordinarios de orden penal, severamente repudiados por la tradición constitucionalista. Tal juicio adverso se funda en que la abreviación de las formas procesales sólo para cierta clase de imputados viola el principio de igualdad y la presunción de inocencia de todo acusado hasta tanto no se declare su culpabilidad. Ello porque las formas procesales importan una garantía cuya supresión o abreviación implica una pérdida y disminución de derechos que se siguen otorgando, en cambio, a los demás procesados. En consecuencia, el establecimiento de trámites especiales abreviados para enjuiciar delitos graves cuando se los atribuye a una determinada clase de imputados es una verdadera pena infligida a éstos pese a no hallarse aún demostrada todavía su responsabilidad.

Resulta, pues, que median contra el organismo creado por la llamada ley 19.053 las mismas razones por las cuales el artículo 18 de la Constitución Nacional proscribió las comisiones especiales. También cabe subrayar que los autores más tradicionales no vacilaron en considerar a los órganos de esta especie como comisiones de esa clase.

Por otra parte, sea señalado repetidas veces que el artículo 102 de la Constitución Nacional impide el juzgamiento de los delitos de jurisdicción federal o local fuera de la provincia donde ocurrieron, lo cual obsta a la creación de un organismo jurisdiccional central de única instancia que pueda conocer en su sede de delitos cometidos en cualquier parte del país.

La doctrina nacional ha afirmado en forma unánime y demostrado ampliamente, por medio del examen de los antecedentes del artículo 102 de la Constitución Nacional, que la finalidad de éste es evitar al procesado la disminución de las posibilidades de defensa que ocurre si se lo arrastra lejos de su residencia. E importa destacar que la garantía fue establecida frente a traslados a gran distancia de personas procesadas por motivos políticos.

Análogos argumentos pueden hacerse valer, en lo pertinente, contra el procedimiento estatuido en la llamada ley 18.670.

Es de hacer notar, además, que el fundamento dado para la creación de los organismos que de acuerdo con este proyecto desaparecerán no resulta en absoluto convincente. En primer término no es exacto que la competencia territorial de los tribunales federales anterior a la vigencia de estos instrumentos a derogar demostrara su ineficacia respecto del juzgamiento de los hechos punibles a que se refiere la llamada ley 19.053. Y, en segundo lugar, tampoco es cierto que —como lo viene a afirmar el mensaje de la llamada ley 19.053— un tribunal de procedimientos abreviados y menores garantías de defensa que las propias de los órganos judiciales ordinarios preserve mejor que estos últimos el concepto que la opinión pública tiene de los jueces.

Lo expuesto no debe ser interpretado en el sentido de que el Poder Ejecutivo se oponga a la implantación del juicio oral en la jurisdicción federal. Por el contrario el gobierno auspicia ese criterio pero ahora se trata de eliminar procedimientos violatorios de la igualdad ante la ley y la defensa en juicio.

En cuanto a las llamadas leyes 18.232 y 19.128, ellas establecen la jurisdicción militar para delitos come-

Secretaría el proyecto presentado por el señor senador Paz.

Sr. Presidente. — Está reservado en Secretaría.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

El sector de la Unión Cívica Radical no tiene ningún inconveniente en el tratamiento de los tres proyectos del Poder Ejecutivo. Atento a la circunstancia de que todos los proyectos se incluirán en el Diario de Sesiones, cuando se realice el debate de las iniciativas del Poder Ejecutivo vamos a formular las observaciones que tienden a mejorarlas.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se considerarán en general las tres iniciativas del Poder Ejecutivo simultáneamente.

—Asentimiento.

5

**AMNISTIA POR DELITOS POLITICOS,
DEROGACION DE NORMAS PENALES
Y GARANTIAS PROCESALES**

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, se pasará a considerar los tres proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo.

Por Secretaría se dará lectura.

—Se leen nuevamente los proyectos de ley a que se refieren los puntos I, II y III de los asuntos entrados.

Sr. Presidente. — En consideración en general los proyectos que se acaban de mencionar.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: el bloque de senadores del Frente Justicialista de Liberación ha estudiado no solamente la letra de estos proyectos anunciados por el señor presidente de la República en la jornada de ayer —anuncio que constituye un episodio que otorga mayor relieve histórico a los sucesos que hemos vivido en la Asamblea Legislativa—, sino que ha estudiado igualmente la situación política y social del país con relación a la cual estos proyectos tienen incidencia.

Este bloque, conociendo el propósito del Poder Ejecutivo, los fundamentos de estas iniciativas y el espíritu que las anima, les presta la más decidida adhesión y el más firme apoyo por cuanto cada uno de sus miembros considera que los acontecimientos que ha vivido la República en las últimas décadas y el desborde de violencia que ha abatido tantos y tan importantes valores morales en nuestro país, requieren en este momento, en que por decisión del pueblo argentino se retoma el camino de la democracia, instrumentos legales que en su beneficio establezcan y cimenten una etapa de auténtica pacificación y de reencuentro de todos los argentinos para cumplir las altas finalidades y los

elevados propósitos que animan el corazón y el espíritu de todos y cada uno de los habitantes de esta tierra.

Frente a la situación que el mensaje del señor presidente ha historiado, el Poder Ejecutivo ha creído que por respeto a las instituciones de la República debía buscar un camino legítimo para brindar esa paz, ese reencuentro y esa tranquilidad. El camino lo ha buscado en la propia norma constitucional que autoriza al Congreso argentino a dictar leyes de amnistía con carácter general.

Estimo que la determinación de dictar una ley de amnistía viene indicada por una imperiosa necesidad pública. No se trata —con ser muy importante— únicamente de que haya determinado número de personas privadas de su libertad, y que estamos ansiosos de que la recuperen, sino también de que esos hombres han sido privados de su libertad injustamente y de que existen otros hombres sometidos a procesos inicuos por aplicación de leyes inconstitucionales y arbitrarias y por procedimientos que han constituido actos de verdadero atropello contra la dignidad y contra los derechos de los argentinos.

Cuando se ha elegido el camino de la amnistía, con seguridad no solamente se ha pensado en que ésta es una ley de olvido, sino también en que hay que borrar todas las consecuencias nefastas de esa legislación opresiva y de esos actos repudiados. Hay que borrarlos, pero no vamos a poder quitar de la mente de nuestros conciudadanos las experiencias dolorosas que se han vivido en estos azarosos años, y que tal vez muchos de nosotros hemos soportado y sufrido en nuestra propia carne y nuestras propias familias. Pero los vamos a borrar para el futuro, como medios de expresión de odios y de antinomias, que imposibilitarían, de mantenerse, la recuperación de la salud moral de la República.

Es una ley de amnistía lo que el país precisa. El indulto —para formular una apreciación de tipo doctrinario— significa el perdón, pero también de alguna manera es el reconocimiento de la validez de actos anteriores cumplidos en virtud de esa legislación, por la actuación de esos tribunales y por la intervención de esos hombres que han creado precedentes nefastos.

La amnistía borra los efectos y las consecuencias jurídicas de los actos y hace recuperar a cada una de las personas que han sido sujetos de esta persecución, de esta odiosidad, la plenitud de su status jurídico de hombres libres y de ciudadanos dignos que habitan una república democrática.

Esta es la alta finalidad, el alto propósito, que tienen estos proyectos de ley, inicialmente el de la ley de amnistía, al que me he de referir más concretamente.

Nosotros no vamos a hacer un estudio de los antecedentes históricos de las leyes de amnistía; ni creo tampoco que deba en este Senado de la República, donde se sientan hombres que han tenido una trayectoria permanente en la vida

nacional, formular disquisiciones de carácter técnico o referencias de índole doctrinaria sobre este tema. Todos sabemos lo que son las leyes de amnistía; conocemos cuál es la autorización constitucional que nos permite entrar en este debate, pero sabemos —y esto es lo importante— qué es lo que la Nación necesita para su recuperación y para la recuperación moral de sus ciudadanos.

Vamos a ir, entonces, a lo importante, y voy a solicitar, en términos de rogatoria, a los señores senadores que nos pronunciemos en forma unánime, en este Senado de la Nación que es la más alta rama del Parlamento argentino donde están representadas las provincias y en la que están representadas la mayoría y la minoría por hombres surgidos de elecciones libres. Por eso, y en atención a lo que significan dentro del federalismo argentino nuestras provincias, entiendo que debemos dar respuesta afirmativa a este propósito y a esta finalidad del Poder Ejecutivo de que se dicte una ley de amnistía amplia y generosa; de que se derogue toda la legislación represiva y penal, que agravia al Parlamento argentino porque ha sido sancionada en violación de la Constitución; de que se resuelva la derogación de un fuero que ha sido establecido a espaldas de los anhelos y de las necesidades de la República, nada más que para servir como instrumento de persecución y de odiosidades. (Aplausos.)

Esto lo pido en término de rogatoria a los señores senadores, repito, íntimamente convencido de que se logrará, por el conocimiento que tengo de los señores senadores desde nuestra incorporación a este honorable cuerpo y la seguridad de que todos estamos imbuidos de que venimos a cumplir nuestra alta función con espíritu patriótico. (Aplausos.)

Sin entrar en los detalles, debo decir que la amnistía va a ser un manto de olvido, va a ser un instrumento de pacificación; va a anular los actos ilegítimos que se han cometido hasta ahora con arbitrariedad, con inconstitucionalidad y con sentido de antipueblo. Las sanciones han sido desproporcionadas: se ha sacado a los ciudadanos de sus jueces naturales, y se han desencadenado consecuencias no solamente referidas a la libertad de las personas, sino de tipo disciplinario, administrativo y ético, es decir, consecuencias de toda clase que han afectado no diré a cientos sino a millares de argentinos. En una sola provincia —en Misiones— hay más de 400 personas sometidas a proceso por pertenecer a las ligas agrarias. Y es sabido que estas ligas, cada vez que realizaban un movimiento en favor de sus reclamos, desataban la arbitrariedad de quienes ejercían el poder, pues las colocaban como infractores penales, a disposición de los jueces de instrucción. ¿Qué vamos a decir de esto si además debemos recordar toda clase de persecuciones desatadas contra nuestros comba-

tientes? Digo, sí, contra nuestros combatientes, no para usar expresiones que puedan considerarse capaces de soliviantar los ánimos, pues los combatientes han sido no solamente los que han empuñado un arma sino la legión de argentinos que hemos estado 18 años en la resistencia contra los regímenes inconstitucionales, anticonstitucionales, opresivos, dispuestos para procurar que se terminara con nuestra dignidad, con nuestra existencia o con nuestros derechos de argentinos.

La resistencia contra la opresión ha sido una cosa generalizada. Tal vez, en alguna ocasión, algún autor escriba un tratado sobre esta época argentina y diga cómo la resistencia a la opresión, que en la doctrina se pone como legítima frente a los regímenes dictatoriales, ha sido ejercida por el pueblo argentino durante 18 años en esta República, y ha culminado con el triunfo del pueblo y de los que han luchado contra la opresión y por la liberación nacional.

Sr. Losada. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Martiarena. — Sí, señor senador.

Sr. Losada. — Quisiera hacerle una pregunta al señor senador: si usted al referirse a esto involucra al gobierno del doctor Illia.

Sr. Martiarena. — Hago expresa excepción del gobierno del presidente Illia. Cuando hablo de 18 años, no me refiero a ese paréntesis. Debo aclarar, sin embargo, puesto que el señor senador me pide la aclaración, que, en mi concepto personal, también ésa ha sido una circunstancia azarosa de la vida argentina, porque debió asumir el gobierno de la República el presidente Illia sobre la base de nuestra proscripción, y aunque a través de él quiso encauzarse un sistema de recuperación de derechos, desgraciadamente termina frustrándose porque nuevamente la fuerza del antipueblo se desató contra ellos, como se había desatado contra todo el pueblo argentino. (Aplausos.)

Nos hemos propuesto, señor presidente, no dilatar la sanción de estas leyes. Nos hemos propuesto no entrar en la menuda disquisición de las cuestiones, antecedentes o de doctrina. Y yo me voy a permitir, por eso, hacer solamente una somera y ligera referencia a la arquitectura de esta ley de amnistía para ubicar con toda precisión cuáles son los beneficios que de ella esperamos —el Poder Ejecutivo y la bancada de la mayoría— han de obtenerse para nuestro país.

Reconozco que la ley sale de los moldes tradicionales. Advierto que ha sido lo común en las leyes de amnistía establecer este beneficio para los delitos políticos y para los comunes conexos con los políticos, militares, etcétera.

Nosotros hemos convenido en que la iniciativa del Poder Ejecutivo es más idónea en esta circunstancia que el sistema tradicional, porque se quiere eludir toda discusión acerca de la natu-

raleza, extensión, profundidad o concepto del delito político y delito común conexo con los políticos.

Nos parece que en esta circunstancia y en este momento que vive la República, si sancionáramos una ley que dijera que se amnistian los delitos políticos y los comunes conexos, se abriría la discusión en cada uno de los tantos millares de procesos que hay pendientes acerca de la naturaleza del delito político y del común conexo con el político.

Nos ha parecido que la iniciativa del Poder Ejecutivo es acertada en el sentido práctico cuando atiende al móvil político, a la determinación que ha conducido a la gente. Si esa determinación ha sido política —social, gremial o estudiantil—, y esto se encara con criterio subjetivo, todos los casos provocados por el móvil quedan amnistiados.

Aquí no hay que entrar a discutir la naturaleza doctrinaria del delito político. Hay que ver si las circunstancias determinantes en ciertos sujetos se refieren o no a una actuación de tipo político en su origen y en su propósito; si es así, el sujeto está amnistiado. Esto es muy simple y muy práctico.

El proyecto, alrededor de este concepto, considera no sólo los actos individuales, sino también la participación en asociaciones llamadas ilícitas, los hechos cometidos por los supuestos miembros de tales asociaciones, los realizados en ocasión de manifestaciones, movimientos, huelgas, paros u otro tipo de actividades colectivas, y los hechos que de alguna manera pudieran servir a los propósitos de esos movimientos, huelgas, paros o actividades colectivas.

Específicamente la ley se refiere y amnistía también a los autores de hechos que tienen vinculación con las leyes 17.401 y 18.234. Esta circunstancia merece un pequeño párrafo. Se trata de las leyes a través de las cuales se ha establecido la incriminación del delito de opinión y de la libertad de pensar y de tener posiciones ideológicas. Es el caso de la llamada ley de represión del comunismo, que bajo la capa y apariencia de represión de un sistema extremista que se dice contrario a los intereses de la República, ha servido para amparar cualquier clase de arbitrariedad y constituye un instrumento de odiosidad y de persecución indiscriminada. Creemos que hay que borrar esto del ámbito de la República.

El presidente de la Nación, doctor Cámpora, ha proclamado ayer que en este país es deseable que todos y cada uno de los argentinos puedan pensar como quieran y tener la ideología que prefieran, dentro del marco de las instituciones democráticas restauradas y restablecidas, donde las opiniones sean respetadas y donde los cambios se determinen por el principio de la soberanía del pueblo. Este es el concepto con que los justicialistas nos movemos. Vamos a respetar todas las opiniones, pero vamos a reclamar

que ellas se expresen en el marco de estas instituciones que recuperamos, afortunadamente, a través de los comicios del 11 de marzo de este año.

La amnistía se dicta con un criterio de amplitud. Prueba de esto es el artículo 39, que extingue todas las sanciones disciplinarias y algunas de carácter ético, que se hayan aplicado en virtud de actos realizados por motivaciones políticas, sociales y gremiales a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de la Nación y a los funcionarios y empleados del Estado, de las entidades descentralizadas y empresas que integran su patrimonio.

Debo decir con relación a esto que, por limitación constitucional, no podemos pronunciarnos sobre situaciones análogas de orden provincial, pero anticipo que el bloque de la mayoría presentará al término de la sesión de hoy un proyecto de declaración con el fin de que el cuerpo solicite a las autoridades de las provincias y municipios, en tanto corresponda por aplicación de los mismos principios y normas de esta ley de amnistía, que dicten en sus ámbitos jurisdiccionales las disposiciones necesarias para subsanar las injusticias que puedan haber sido cometidas en las provincias y en los municipios, en iguales situaciones que las que prevé la ley nacional.

Los efectos que la ley presupone son los comunes de la amnistía más amplia: la extinción de todas las consecuencias penales de las sanciones administrativas. Dejamos a la esfera del Poder Ejecutivo la reglamentación del procedimiento para efectuar las reincorporaciones y restituciones de derechos, e incluimos una cláusula relacionada con el artículo 175 del Código de Justicia Militar, que tal vez merezca una pequeña explicación para el momento de su aplicación: por medio de esa disposición legal se ha podido dar de baja a miembros de las fuerzas armadas por la sola circunstancia de que no hayan concurrido a una citación de tribunales militares.

Deseo detenerme en el artículo 79. Conozco las observaciones que los señores senadores de las otras bancadas han hecho a este artículo. Interpretan que se aparta de las normas comunes en la materia que indicaban que el interesado, por sí, o la justicia, de oficio, debían actuar para la aplicación de la ley de amnistía; estiman que constituye, por lo menos, un abandono de las prácticas anteriores que comisionemos al Poder Ejecutivo para ordenar la inmediata libertad de quien pueda encontrarse en las situaciones que la ley prevé.

Desde luego, no hay ninguna disposición que impida al propio Congreso de la República, por vía de la interpretación auténtica de su propio pronunciamiento, indicar cómo se va a aplicar la ley que ha dictado. Es perfectamente constitucional que este cuerpo se expida, y así lo hace en este artículo 79, cuando declara comprendidos en las prescripciones de la ley a quie-

nes han sido sentenciados o tienen causa en trámite en los tribunales creados por las leyes 18.670 y 19.053, que vulgarmente se han llamado «la cámara del terror», y en los consejos de guerra constituidos en virtud de la ley 18.232 y decreto 739/67, siempre que estas personas se encuentren sometidas al régimen carcelario llamado «de extrema peligrosidad», otro de los inventos nefastos del régimen, que se sancionó bajo la ley 19.863.

Cuando se da esta circunstancia, no es necesario ir a ningún juez; cuando hay una persona condenada o privada de su libertad o con proceso en trámite, que de alguna manera la está afectando —porque eso se ha dictado en una de estas cámaras inconstitucionales e ilegales—, y se está además sometido al régimen «privilegiado», diríamos así, de la mayor opresión carcelaria, no hay para qué ir a ningún juez.

El Poder Ejecutivo tiene en su poder el auto de calificación o la comunicación a través de la cual el hecho tiene un encuadramiento en determinada norma, y entonces es obvio que el Poder Ejecutivo pueda por sí mismo ejercer la aplicación y ejecución de esta ley, y dejar en libertad a quien está sufriendo el embate de las leyes persecutorias.

Estamos por la solución rápida de estos problemas. No creemos que haya que entrar en ninguna clase de dilaciones y no estimamos, de ninguna manera, que se estén afectando los privilegios del Poder Judicial ni las normas constitucionales. Estamos dándole al Poder Ejecutivo la facultad de ordenar libertades de personas que, por definición nuestra, están comprendidas en la norma que sancionamos.

Para los casos que no están incluidos dentro de este artículo 7º se crea un procedimiento judicial: son los casos de gente en libertad, sometida a un proceso que está en trámite ante los jueces, y que sin ningún apuro, sin ningún apremio, puede pedir, o sucederá de oficio, que se llegue a la aplicación de esta ley de acuerdo con el procedimiento que establecemos con alguna minuciosidad, pero con el concepto de que los términos sean breves y que la justicia resulte eficiente y eficaz en la dilucidación y decisión de las causas sometidas a su conocimiento en virtud de esta ley.

No creo que sea necesario entrar en el detalle pormenorizado de estas normas de procedimiento e insisto en que, desde la habilitación de días y horas que se marca por imperio de la ley a partir del momento de su sanción para todos los casos, hasta la asignación de competencia a los órganos superiores para evitar los trámites dilatorios de las apelaciones, todo está indicando un propósito de pronta resolución de las cuestiones sometidas a la justicia.

Debo aludir a una situación que de alguna manera provoca inquietud. Es si a través de esta ley podría considerarse beneficiario de sus disposiciones alguien que quisiera ampararse en ellas, a pesar de sus intenciones tortuosas y

persecutorias del pueblo argentino. Para que sirva a los fines de la interpretación, si se llegara a presentar algún caso de éstos, manifiesto que, en el concepto del bloque de la mayoría, esto no puede ocurrir, por la muy sencilla razón de que el uso abusivo del poder y la falta de motivación política hacen que nadie pueda invocar los beneficios de la ley de amnistía cuando se ha abusado del poder, porque ella es dictada precisamente para proteger a quienes han sido las víctimas del uso abusivo del poder.

Aunque se trata de una circunstancia de detalle, para no repetirlo en el momento del tratamiento en particular, anticipo que, en el artículo primero, vamos a proponer la substitución del día 24 por el día 25. Evidentemente, se ha querido unir la sanción y la vigencia de esta ley con la fecha del restablecimiento de las instituciones democráticas y de la asunción del mando por el presidente de la República, que han ocurrido el día 25 de Mayo. Se trata, pues, de un evidente error material.

Con relación a la segunda de las leyes, sobre derogación de la legislación penal, el fundamento es muy claro para quienes vivimos adheridos a la convicción de que el Estado se debe regir por el acatamiento a la Constitución y a sus normas. Los gobiernos defacto podrán atribuirse todas las facultades que la fuerza les permite, pero cuando se restablecen el orden constitucional y sus instituciones, la primera obligación de quienes investimos su representación es poner en lo alto de nuestras aspiraciones el respeto por los privilegios del Parlamento argentino. Se ha dictado legislación al margen de los representantes del pueblo de la Nación, mediante las llamadas «leyes». Reconozco y comprendo que no podemos borrar de un plumazo toda la legislación del gobierno defacto, porque afecta instituciones de la vida civil, comercial, administrativa, etcétera, que han tenido ejecución y que no podemos hacer desaparecer sin crear el caos en la República; pero con referencia a las leyes en materia penal debemos ser inexorables. Debemos decir que los gobiernos defacto no tienen jamás facultades para modificar los estatutos que establecen sanciones para los hechos tipificados como delitos; que carecen absolutamente de esa prerrogativa, y que cuando se restablecen las instituciones de la República debemos velar por los privilegios del Parlamento y anular y aniquilar toda la legislación represiva.

Este es el concepto con que se maneja la redacción de esta ley. No vamos a admitir legislación penal dictada por los gobiernos defacto desde el último gobierno constitucional, a partir del año 1966. De ahí que en forma general el proyecto proponga que, a partir de la vigencia de esta ley, pierdan eficacia las disposiciones por las que se hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional, cual-

quiera sea el nombre que se le haya dado al acto legisferante por el que se las dictó. Se enumeran después las leyes de que se trata. Advierto que podrá causar algún efecto a alguien el hecho de que por esta ley estamos dejando sin validez jurídica la reforma que se ha introducido en el Código Penal en más de cien de sus artículos, pero no vamos a dejar en blanco a la sociedad, porque se ha previsto que las normas en vigor al momento de dictarse las que pierden ahora eficacia recobran automáticamente su vigencia. Hasta tanto nosotros los senadores y diputados de este Congreso estudiemos y sancionemos un Código Penal acorde con las necesidades de la Nación para esta época en que nos toca vivir y la que proyectamos que se viva en lo sucesivo, nos ajustaremos a las normas penales del anterior código, que quedan restablecidas en su vigencia.

Todas las leyes que se mencionan, tienen contenido de sanciones de tipo punitivo y caen dentro de este principio general que informa y fundamenta la ley. Mantenemos, sin embargo, y le damos sanción a algunas de las normas introducidas por vía de modificación en algunos de esos estatutos. Lo hacemos por una razón de tipo práctico. Decimos que van a tener validez porque nosotros las sancionamos y restablecemos; así, con relación a las penas de multa existen procesos y sentencias en los cuales ha tenido ejecución la escala de multas sancionada por la reforma. Y convertimos en ley algunos delitos, o sea los que estimamos que dejarían a la sociedad sin una adecuada protección en caso de una derogación lisa y llana. Se trata de disposiciones de tipo transitorio que invito a la Honorable Cámara a que las apruebe sin perjuicio de que sean revisadas, sin embargo, en ocasión de que dictemos la legislación penal que el país necesita. Es por ese motivo que la misma ley en su artículo 5º propone la formación de una comisión reformadora integrada por magistrados y técnicos del derecho que, en su especialidad, podrán dotar al país de un estatuto indispensable para esta altura de los tiempos que vivimos.

En cuanto al tercero de los proyectos, sobre restablecimiento de las garantías procesales, el mismo tiende a borrar los fueros especiales, cuya presencia en el país constituye una aberración; tribunales creados con un propósito persecutorio del tipo más opresivo, con procedimientos que de ninguna manera aseguran los derechos elementales de la persona sometida a juicio; con modos de actuación que contrarían lo más elemental en cuanto a las facultades que asisten al hombre sospechado de cometer un delito, para la defensa de sus intereses; esto que la calle ha llamado «la cámara del terror», porque a través de las actuaciones indebidamente llamadas judiciales, por cuanto son aberrantes, aunque lleven el nombre de judiciales, han constituido instrumentos de persecución

contra muchos cientos de ciudadanos, culminando con lo que he referido hace un momento y que se ha llamado «el régimen carcelario de extrema peligrosidad» que se ha aplicado a los perseguidos políticos, sacándolos de sus jurisdicciones, poniéndolos en mazmorras al lado de las cuales tal vez los ergástulas de la Edad Media sean el único antecedente que podamos recordar. Tenemos que borrar todo esto; hay que eliminar la ley represiva inconstitucional y hacer desaparecer los organismos judiciales creados para la persecución y para el odio. Con ello vamos a iniciar una etapa nueva en la vida nacional y lo haremos excluyendo esto que irrita a las grandes masas del pueblo argentino; esto, que ha hecho víctimas en miles de personas; esto, que mantiene enardecido el ánimo de muchos cientos de argentinos que se sienten agraviados y dolidos porque han sido víctimas de persecuciones y de este tipo de juzgamientos al margen de lo que marca la ley fundamental de la República y al margen de lo que debió ser reglado para el progreso y para el bienestar de toda la República. Tenemos que borrarlo, y yo propongo que demos el apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo para hacerlo terminante y definitivamente.

Todo lo que se refiera a la creación de los organismos judiciales debe emanar, en esta República, de este Congreso. Nosotros, señores legisladores, somos los que debemos apreciar en qué momento, en qué circunstancia, en qué medida y en qué profundidad el país necesita que se creen tribunales de justicia, sin dejar en ningún momento de lado las prescripciones de la Constitución Argentina que consagran el beneficio de la defensa en juicio y el derecho garantizado de todos los ciudadanos frente a quienes deben juzgar su conducta.

Las causas —porque hay causas en trámite— deben pasar a los jueces naturales. Establecemos quién ha de ser el encargado de dar ese paso, que será el presidente de la Sala en lo Criminal y Correccional de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-administrativo. Por otra parte, hacemos cesar por imperio de la ley a los magistrados y funcionarios de aquellos tribunales. Con respecto a esta situación, en la discusión en particular vamos a proponer el agregado de dichos magistrados en el artículo 2º, es decir, que el mismo se referirá a los jueces y funcionarios para evitar cualquier interpretación equívoca. Hacemos cesar a los magistrados y funcionarios de estos fueros, que son los que ocupan los cargos en virtud de las leyes de su creación, y dejamos que el personal administrativo y de maestranza sea examinado, en cuanto a su destino, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual establecemos el debido respeto al alto tribunal que ejerce superintendencia sobre el personal dependiente del mismo.

Como hay un presupuesto dictado, a través del cual se ha estado manejando este género de justicia, proponemos que las partidas no queden vacantes sino que se destinen para mejorar la administración normal de la justicia, creando a tal efecto tres nuevas salas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y dos fiscalías, que según las informaciones de los tribunales de la Capital son indispensables para el mejor funcionamiento de la justicia en lo penal.

Dejo así expresados en general los fundamentos que el Frente Justicialista de Liberación sostiene para solicitar la sanción de estas leyes. Reitero, muy brevemente para no excederme, que depositamos nuestra confianza en el futuro que se ha iniciado ayer en nuestro país, y también en nosotros mismos que venimos a este Parlamento argentino a sentar las bases de la restauración institucional del país, a decir que lo que está mal será borrado de un plumazo, y que nos vamos a esforzar para hacer las cosas bien, para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Señor presidente, señores senadores: después de casi siete años de silencio, la voz del pueblo se oye otra vez en este recinto para dictar sus propias leyes, y es auspicioso que el primer acto que realizamos sea para restablecer el pleno ámbito de la libertad en la Argentina y para contribuir a la pacificación nacional. La Unión Cívica Radical, coincidiendo con ese espíritu, ha presentado un proyecto de amnistía amplio y generoso que contempla todos los delitos políticos y los comunes y militares conexos, incluso las faltas cometidas por iguales motivos. En el mismo texto se incluye una amnistía amplia por infracciones cometidas en la administración pública y comprende las sanciones administrativas aplicadas por razones de discriminación política, ideológica, gremial o estudiantil. Incluye nuestro proyecto una amnistía amplia para los jóvenes afectados por infracciones al servicio de conscripción o desertiones del Ejército, porque queremos que también ellos, aunque las causas de sus faltas o infracciones no sean generalmente políticas, puedan incorporarse sin trabas ni dificultades al nuevo proceso que se inicia.

Por una norma especial de nuestro proyecto se prevé que una ley a dictarse con posterioridad contemple la situación de los damnificados por daños en las personas por los delitos que se amnistían, y que el Estado deba atender a esa indemnización.

En el otro proyecto de ley que también está reservado en Secretaría nuestra representación propone la derogación de todas las leyes represivas dictadas por el gobierno defacto.

Finalmente, anuncio a esta Honorable Cámara la presentación de un estatuto completo para la regulación del recurso de hábeas corpus, de modo de eliminar todas las restricciones sancio-

nadas por el Poder Ejecutivo defacto y ampliar el ámbito de la garantía extendiéndolo, entre otros aspectos, al control de la forma en que se cumple la detención, de modo de desterrar para siempre la posibilidad de que la tortura pueda aplicarse en los lugares de detención. No dudamos, señor presidente, que la mayoría nos acompañará en su sanción con el mismo espíritu con que aquí propone la derogación de las leyes represivas. Porque todos queremos que la libertad no sea conculcada más en nuestro país. Que la violencia no sea el medio para gobernar o para disentar. Como nuestro partido lo dijera en agosto de 1972, «ni la represión exagerada, ni el crimen político, ni la tortura o el secuestro pueden ser respuesta adecuada a nuestra responsabilidad como Nación».

Un grupo militar irrumpió mediante el empleo de la fuerza física en el gobierno de la Nación, desalojando del poder, una mañana de junio de 1966, a un gobierno constitucional, frenando su obra liberadora. Estableció un régimen autoritario que avasalló las libertades, disolvió los partidos políticos, afrentó a las universidades en la triste noche de los bastones largos; en suma, instauró la violencia y anuló el diálogo, cerrando al pueblo sus medios normales de expresión. Un régimen que estableció la violencia como sistema, que despreció la significación de los partidos políticos, despreció el significado y la trascendencia de la no violencia, sólo pudo recoger violencia, tal vez por aquello de que quien siembra vientos recoge tempestades.

Y así fuimos poco a poco, y de más en más, penetrando en un clima de duros enfrentamientos. Pero no se trata, señor presidente, ahora que todos queremos olvidar, de analizar dónde empezó y cómo siguió la violencia, sino de reemplazarla para siempre, como dijera nuestro partido el 3 de abril de 1973.

Lo cierto es que en el largo desencuentro vivido las fuerzas de la violencia se mezclan en una nebulosa donde ya no se sabe bien qué es lo justo y qué es lo injusto, quiénes luchan por restablecer la democracia, quiénes por retornar a totalitarismos superados.

Por eso, lo importante es olvidar; lo sabio es perdonar. Nosotros hemos querido acompañar siempre el olvido y el perdón cada vez que ha sido necesario para contribuir a la paz.

Cuando tuvieron que salir a la calle los radicales para defender el sufragio y luchar contra la corrupción y fueron vencidos, leyes de amnistía generosas reconocieron después la hidalguía de su lucha. Así también ahora, señor presidente, nosotros auspiciamos el olvido y el perdón y queremos que esta amnistía sirva a la causa de la paz.

Como dijera un eminente legislador del radicalismo, Emilio Ravignani, «cuantas veces se han agitado las pasiones políticas y se han lle-

vado al terreno de la acción, tantas han sobreenvenido las leyes del olvido, aun en momentos históricos en que el odio parecía conducir a la destrucción recíproca de los conciudadanos». Nosotros creemos que hoy, recuperadas las instituciones de la democracia, es preciso otra vez olvidar.

Dijimos ayer y repetimos hoy: «el país necesita unirse y reencontrarse; por eso apoyaremos una ley de amnistía que sirva para la pacificación y el olvido». Sabemos también que cuando los desencuentros han sido hondos, esa ley requiere un supremo esfuerzo de todos para olvidar y para perdonar. Quienes padecieron, le deben a la República ese supremo sacrificio de perdonar y de olvidar cuando el pueblo quiere que se olvide y se perdone. Por eso también dijimos, y lo repetimos hoy, que la amnistía que sancionará el Honorable Congreso «no debe servir para la revancha ni para intensificar la violencia». Votaremos esta ley en general, con el verdadero sentido que tienen nuestras instituciones: pacificar y olvidar para lograr el reencuentro de los argentinos.

Esta no es la ley del vencedor sobre ningún vencido; será la ley que eche un velo de olvido sobre el desencuentro argentino, sobre el dolor pasado, para que sea posible la obra liberadora de esta nueva etapa.

Nosotros lo proclamamos siempre y con ese espíritu apoyaremos en general el proyecto del Poder Ejecutivo, y lo apoyaremos, señor presidente, a pesar de que nosotros fuimos víctimas de la violencia porque un cuartelazo, en junio de 1966, desalojó a nuestro partido del poder, porque estuvimos convencidos siempre de que la unión de las fuerzas civiles de la República era el medio para el restablecimiento de la democracia argentina y el instrumento para recuperar las instituciones republicanas. Y esto fue logrado por todos los partidos unidos en La Hora del Pueblo que demostraron que la civilidad estaba de pie para reclamar la vigencia de las instituciones, en defensa de sus derechos, haciendo valer su razón. Y que esa experiencia sirva, señor presidente, para que nunca más se recreen viejas antinomias; para que sepamos mirarnos todos en la fraternal convivencia de la democracia, sin buscar en el pasado aquello que nos divide y nos separa, porque ese pasado tiene malos recuerdos, de muchas épocas, y de él solo debemos extraer la experiencia pero no el rencor. Sólo así podremos hacer la gran obra de recuperación que el país reclama.

El nuevo gobierno debe comprender la grave responsabilidad que tiene de remover las causas que dieron origen a esa violencia, y que la política del gobierno debe hacer cierta la emancipación nacional; que debe asegurar la distribución más justa de la riqueza en el ámbito de una democracia social; que debe asegurar la plena vigencia de la libertad, porque

es preciso que dentro de la democracia y de la libertad se respete plenamente a las minorías porque también constituyen parte del pueblo. Por ello también es preciso que no se aliente jamás a la revancha y a la violencia. Esta, señor presidente, es la hora del pueblo, de todo el pueblo argentino, y no de un sector en particular.

Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de amnistía y al que está en consideración, por haberlo resuelto así este cuerpo, es decir el proyecto del Poder Ejecutivo, lo apoyaremos en general, pero con una serie de importantes observaciones que surgen del texto y de los fundamentos del proyecto de nuestra representación.

La amnistía debe comprender, como lo ha expresado el señor senador preopinante, a los delitos políticos; y he de ahorrarme, en homenaje al cuerpo, el análisis de las teorías subjetivistas y objetivistas con que se afaná la doctrina procurando definir este concepto escurridizo.

Carrara pudo decir en su momento que querer definir el delito político llevaba fatalmente a hacer una exposición de la historia de los pueblos. «¿Para qué fatigarse entonces, decía, en construir una trama jurídica que siempre será rota por la espada o por el cañón?». De todos modos puede quizás decirse, en un esfuerzo de síntesis, que el delito político es aquel que representa un ataque contra el orden político constituido, sus poderes públicos o la soberanía popular. Objetivamente, está constituido por los delitos de rebelión y sedición previsto en el Código Penal, aunque es dable reconocer que las transformaciones históricas han llevado a otras formas de rebelión que tal vez no encuadran exactamente en esas figuras. Y el derecho no puede ignorar la realidad. Por eso es preciso reconstruir la noción de delito político sobre nuevas bases, lo suficientemente objetivas para que sean seguras pero no tan rígidas como para que puedan resultar ineficaces.

En nuestro proyecto hemos querido, precisamente, otorgar la amnistía para los delitos políticos comunes, militares y conexos y hemos hecho referencia a los delitos cometidos por causas políticas, lo que extendemos también a las gremiales y estudiantiles, para usar así la expresión del artículo 18 de la Constitución Nacional. Si encontramos apoyo en el texto de la Ley Fundamental tenemos la seguridad de no errar; serán los jueces, como debe ser en todo estado de derecho, los encargados de interpretar y de aplicar la ley. Nuestro proyecto asegura, al mismo tiempo, que la amnistía no sea extendida a delitos comunes, como cuando el móvil político es invocado para encubrir una delincuencia de ese tipo. Esta ley no debe servir, señor presidente, para dar impunidad a delitos comunes.

Pensamos que el proyecto del Poder Ejecutivo, en su artículo 1º, inciso a) al conceder

la amnistía, «cualquiera sea la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho», abre una puerta peligrosa a lo que debe considerarse delincuencia común.

El juez queda despojado, prácticamente, de la posibilidad de interpretar la ley. Bastará que cualquiera invoque un móvil político, por más remoto, absurdo o inadmisibles que sea, para que el juez deba fatalmente aplicarle esta ley. Exagerando el ejemplo podría llegarse a sostener que hasta el adulterio cometido con afán de desprestigio a un funcionario e invocándose un móvil político de ese tipo, quedara considerado como delito político. Todos esos hechos, señor presidente, que conmueven a la opinión pública, como esos secuestros evidentemente no políticos que llenan las planas de los diarios, y que tienen fines egoístas y de rescate, si sus autores invocasen un móvil político cualquiera quedarían impunes, sin posibilidad de que los jueces penetrasen en la realidad de los acontecimientos que deben juzgar. Por eso nosotros preferimos el texto de nuestro proyecto, en reemplazo de los incisos a), b) y c). Consideramos que la formulación técnica del nuestro es superior y que evitará un precedente de distorsión y extensión inusitada a que lleva el exagerado subjetivismo de la redacción del Poder Ejecutivo.

Hemos considerado también que la referencia a la «ocasión», en los incisos d) y e), consagra un criterio de contemporaneidad que no es adecuado. Nosotros estamos de acuerdo que los hechos ocurridos en huelgas y manifestaciones están comprendidos en la amnistía, pero para comprenderlos es suficiente la expresión «motivo» del proyecto del Poder Ejecutivo. El añadir «en ocasión» lleva a que hechos comunes, delitos comunes cometidos durante esos episodios, queden comprendidos en la amnistía. Y el ejemplo del carterista tal vez sea el que mejor revela el exceso de la fórmula.

Por otra parte, nuestro proyecto comprende las faltas policiales, no previstas en el proyecto del Poder Ejecutivo. Si queremos realmente olvidar es conveniente que olvidemos todo, y tengamos en cuenta que muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que han participado de manifestaciones, han sido sancionados por aplicación del edicto de reuniones públicas, por ejemplo, y ese precedente, esa condena, tiene influencia posterior a los fines de la reincidencia.

De acuerdo con el criterio de la mayoría de las leyes dictadas en nuestro país, comprendemos también a los delitos conexos, comunes o militares. Ya la Corte Suprema de Justicia, aun en leyes que no los preveían expresamente, los consideró incluidos dentro del contexto mismo del hecho político.

En nuestro proyecto prevemos también que una ley especial pondrá a cargo del Estado la indemnización por los daños causados en las personas por los hechos que se amnistían. Y yo observo, señor presidente, que el artículo 69 del

proyecto del Poder Ejecutivo dispone que nadie podrá ser interrogado ni molestado por esos hechos, con lo cual, si no se formula la aclaración correspondiente, quedará extinguida, sin posibilidad de ejercerse, la acción civil para la reparación del daño causado. Y esto, evidentemente, no es posible porque afecta derechos subjetivos, individuales, y no debe ser el ámbito propio de la amnistía.

Hemos propuesto también una amnistía amplia para las infracciones administrativas, y en esto podemos aceptar el texto del Poder Ejecutivo. Pero consideramos importante que al hacerse el análisis en particular de la ley se incluyan las infracciones al servicio militar o a las deserciones del Ejército, para los fines que he enunciado al principio de esta exposición.

Señor presidente: nosotros auspiciamos esta ley de amnistía, excluyendo de ella los delitos comunes, evitando los riesgos de un peligroso subjetivismo, para que la ley que vamos a dictar encuadre dentro de nuestra tradición jurídica y de nuestras instituciones. Debo decir, en fin, que no compartimos lo establecido en el artículo séptimo del proyecto del Poder Ejecutivo, y el señor senador Martiarena se ha anticipado a nuestra crítica sobre este punto.

Allí se quiere establecer una interpretación auténtica que reviste, en rigor, los caracteres propios de un indulto, invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo que, por otra parte, según las noticias de los diarios, ya ha ejercido esa facultad en el día de ayer. La cuestión legal ante eso pierde casi toda su importancia; pero sí la tiene a mi juicio el hecho de que el Poder Ejecutivo nos haya remitido el proyecto de ley que estamos considerando, incluyendo esta norma, sin anunciarnos que ejercería la facultad de indultar. Si la responsabilidad fue delegada al Parlamento, una elemental consideración debió privar, aguardando nuestra decisión que, como lo prueba la sesión de esta tarde, ni se demora ni se quiere demorar.

La cuestión del artículo 79 pierde un poco, pues, su significación. Pero importa reafirmar que si se sanciona sentará un precedente incorrecto. Al enviarnos ese texto, el Poder Ejecutivo aparece como dándose órdenes a sí mismo, e incitándonos a ejercer una facultad que le es propia, como la de indultar. Por otra parte, se invade la esfera del Poder Judicial, quebrándose la división de los poderes. La ley de amnistía es una ley general que deben aplicar los jueces en cada caso concreto, en cada proceso en particular, según los hechos y las circunstancias que consten en él. La amnistía, ha dicho la Corte Suprema, es de aplicación judicial, porque es materia comprendida en el artículo 100 de la Constitución Nacional. Se trata de actos de juzgamiento en base a una ley que a esos fines debe ser interpretada. Por lo demás, la mera libertad dispuesta por el poder administrador priva al beneficiario de la sentencia judicial,

que es la que debe hacer cosa juzgada a su respecto. Por eso preferimos nuestra solución, que prevé un trámite rápido y jurídicamente irreprochable para que estas cuestiones puedan resolverse en el ámbito de la justicia.

En la reunión realizada entre los distintos bloques el día de ayer, inaugurando un nuevo estilo de colaboración y de eficacia parlamentaria, formulamos algunas observaciones al proyecto del Poder Ejecutivo, que al parecer no han sido recogidas. Por eso cabe a nuestra representación insistir sobre ellas para que se tengan en cuenta al votarse la ley en particular.

Aspiramos, señor presidente, a que la amnistía proyectada sirva eficazmente a la unión y la paz entre los argentinos, y que sea rectamente interpretada y sentida, para que superemos todas las divisiones de nuestro pasado. Sabemos que no logrará por sí sola tan altos objetivos, pero sabemos también que ayudará a lograrlos.

Tal vez aún no hayamos olvidado. Pero esta ley ayudará a que se olvide, a que se desarmen el brazo y el espíritu. Hoy las aguas se dividen. Aquella nebulosa de ayer a que me refería al principio ha desaparecido ya. La violencia no tiene ahora razón de ser, porque el pueblo ha recuperado sus instituciones y tiene los gobernantes que ha elegido. De manera que la violencia que pudiera producirse en adelante no tendrá explicación.

Señor presidente: es nuestra esperanza que el país avance realmente por el camino de la paz y la plena vigencia de las instituciones.

El otro aspecto que está hoy a consideración de esta Honorable Cámara es el relativo al problema que ha planteado al gobierno constitucional la existencia de numerosas leyes de carácter penal dictadas por el gobierno defacto. Personalmente comparto la opinión sustentada por muchos autores, según la cual la aplicación en el actual estado de jure de una pena fundada en un decreto ley —porque eso, y no otra cosa, son las mal llamadas leyes del gobierno que ha cesado ayer—, significa aplicar una pena mediante un procedimiento contrario a las normas de la Constitución Nacional. Es el caso de la analogía prohibida por los artículos 18 y 19 de la Constitución.

En el momento actual, según los artículos citados, sólo una ley emanada del Congreso y sancionada de acuerdo con el procedimiento que la misma Constitución prevé, puede establecer prohibiciones de determinadas conductas y sancionarlas penalmente. El artículo 18 de la Constitución establece que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley previa. Cuando aquí se habla de ley, señor presidente, se consagra una garantía de la libertad individual.

Este concepto ha tenido a lo largo del tiempo una evolución compleja, porque se ha considerado, en determinados momentos, que perdían automáticamente su validez con el restablecimiento del gobierno constitucional. Fue en el

año 1947 cuando la Corte Suprema varió el anterior criterio y reconoció vigencia a los decretos o decretos leyes sancionados durante el gobierno defacto anterior.

Es en esos términos que se plantea la problemática que debemos examinar y resolver.

En 1964, el Poder Ejecutivo nacional, al enviar al Honorable Congreso el proyecto de la que sería ley 16.944, refirmó el concepto de que sólo por una ley del Congreso pueden establecerse normas penales, de modo, señor presidente, que participamos de la idea expuesta por el señor senador Martiarena de que sólo por ley del Congreso pueden crearse delitos y penas; pero lo que no compartimos es el modo en que se quiere proceder a la derogación, utilizándose en el artículo 1º del proyecto del Poder Ejecutivo la expresión «perderán su eficacia». El Parlamento, señor presidente, deroga o sanciona leyes, y no puede hacer declaraciones o expresiones que no tendrían más valor que el reconocimiento de simples hechos. La eficacia es una cuestión propia de los hechos, y las normas tienen vigencia o carecen de ella, tienen validez o no la tienen. Pero esta cuestión debe ser considerada por el Poder Judicial. No nos toca a nosotros declarar si una ley es o no inconstitucional: los legisladores o sancionamos o derogamos.

A nuestro juicio, el otro aspecto de esa declaración del artículo 1º, de que perderán eficacia las normas establecidas por el Poder Ejecutivo defacto, se resuelve en un ámbito doctrinario que no observa la adecuada prudencia con que deben examinarse estas cuestiones, y no la observa porque se produce una forma de desincriminación por la cual, en los hechos, se está otorgando una forma de amnistía, dicho en otros términos, para delitos comunes. Cuando se dice que se convierten en leyes algunas de las normas sancionadas en el período defacto, su ratificación sólo puede regir para lo futuro, mientras que la declaración de pérdida de eficacia del artículo 1º, en virtud del artículo 2º del Código Penal, implicaría desincriminar hechos tales como defraudaciones cometidas en la venta de departamentos y otra serie de hechos graves, provocándose una suerte de vacío jurídico y dándose impunidad a delitos comunes.

Es cierto que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta algunas de esas normas y proyecta convertirlas en ley, pero hay muchas otras que no han sido consideradas. Por ejemplo, no se podría castigar, y quedarían impunes, a quienes traficaran con psicotrópicos; quedarían impunes los que incurrieran en amenazas o coacciones. Y como las normas que se prevé convertir en ley son las que protegen el derecho de propiedad, resultaría que por esta ley quedaría más protegida la propiedad que la libertad.

Por otro lado, la tenencia ilegítima de alca-
loides pierde su regulación como estaba previs-

ta; el delito de balance falso en su nueva formulación desaparece, y se dará impunidad a una serie de delitos comunes; el delito de quiebra, tal como fue entendido por la ley 18.953, cuando se trata de una sociedad financiera, no podrá más ser aplicado.

No quiero en esta exposición general entrar en el análisis en particular de estas cuestiones omitidas; pero sí señalo, señor presidente, que hubiera sido oportuno que este asunto se estudiara con la seriedad y la responsabilidad con que se hizo en 1964, ocasión en la cual se derogaron los decretos leyes y se sancionaron las normas complementarias para asegurar la protección penal de la sociedad.

Voy a referirme, señor presidente, al último de los proyectos en consideración, el relativo a las leyes procesales que, efectivamente, afectan garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución. No tengo aquí observaciones fundamentales que formular, pero sí señalo el artículo 5º, en el que se estipula que la Corte Suprema decidirá sobre la situación del personal. Nosotros consideramos que el espíritu del proyecto es que ese personal sea redistribuido y escalafonado en otras funciones. Por eso consideramos que la ley debiera decir que la Corte Suprema procederá a redistribuirlo. El personal de menor jerarquía, señor presidente, no tiene por qué estar comprendido en el sentido de la decisión del artículo 2º de este proyecto de ley.

Consideramos que las observaciones formuladas son decisivas y que deben ser atendidas al realizarse la votación en particular. Ellas son, en resumen: primero, aceptar el texto de nuestro proyecto para el artículo 1º de la ley de amnistía; segundo, no sancionar el artículo 7º del proyecto de ley de amnistía y sí, en cambio, el artículo 6º del proyecto de nuestra representación; tercero, incluir el artículo 2º de nuestro proyecto o, al menos, dejar a salvo el derecho a indemnización civil en el artículo 6º del proyecto del Poder Ejecutivo; cuarto, dejar a salvo las facultades legislativas de las provincias en el artículo 8º de la ley de amnistía; quinto, suprimir el artículo 1º del proyecto de derogación de leyes represivas y redactar el artículo 2º derogando en forma expresa las leyes en él enunciadas con lo cual estamos en completo acuerdo sexto, incluir la norma de nuestro proyecto amnistiando a infractores del servicio militar y a desertores; séptimo, prever la redistribución del personal en el artículo 5º del tercer proyecto de ley.

Señor presidente, señores senadores: tenemos la esperanza que los proyectos de ley considerados, con las observaciones formuladas por nuestra representación, una vez sancionados, servirán para restablecer el ámbito de la libertad en la República y ayudarán a lograr la pacificación del país. Habremos contribuido así, efectivamente, a la plena vigencia de la democracia. (Aplausos.)

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: aborda hoy el Senado de la Nación el estudio de su primera ley. Es la ley de amnistía, que ha sido calificada con razón como el instrumento inicial de la pacificación del país.

El bloque del radicalismo ha manifestado en su proyecto sobre el tema el deseo de que esta ley sirva efectivamente a la unión y a la paz social entre todos los argentinos. Sabemos que no logrará por sí sola tan altos objetivos como decimos en los fundamentos, pero sabemos también que ayudará a lograrlos.

La amnistía, que ya Trasíbulo aplicó en la antigüedad a los gobernantes por él derrocados, significa un acto de olvido sobre conductas y hechos de un período anterior. Ella nos sumerge necesariamente en la consideración de la etapa histórica inmediata que hoy nos conmina a considerar este proyecto. Y lo hacemos con alta responsabilidad y sin más presión que la que nos dicta nuestra conciencia de hombres militantes del pueblo y de representantes de él en el Parlamento.

Aspiramos todos, señor presidente, a que ayer, 25 de mayo de 1973, se haya cerrado definitivamente en la República un período histórico signado por la intervención de las fuerzas armadas en la vida política de la Nación marginando la voluntad soberana del pueblo, como viene sucediendo desde aquel nefasto 6 de septiembre de 1930, y cuyo último capítulo, con caracteres que a poco andar se teñirían de sangre, se empezó a escribir cuando el 28 de junio de 1966 los intereses imperialistas, en connubio con sus aliados nativos, derrocaron al gobierno constitucional que presidía con honor el doctor Arturo Illia.

El análisis profundo y no meramente cronológico de este período al que hoy nosotros estamos ofrendando la amnistía, nos obliga a desentrañar su nota característica y fundamental que es sin duda la violencia y que no se da aislada en la Argentina sino en el contexto de una realidad mucho más amplia en la que se enfrentan opresores y oprimidos en un clima que rompe evidentemente la convivencia humana.

Sería un desatino afirmar que el fenómeno de la violencia irrumpe como algo desconocido en la vida moderna. Pero no lo es, en cambio, señalar que en este siglo la violencia se enseñorea por doquier. No bastó extender por todo el orbe en dos ocasiones la vieja violencia admitida por los hombres, que es la que las naciones ejercitan entre sí mediante la guerra. La fuerza violenta se practica también en el seno mismo de los países para reprimir y oprimir al servicio de sistemas económico-sociales marcadamente injustos.

La extensión de la violencia a las sociedades definidas como civilizadas, ha roto la vieja tesis que reservaba la manifestación del fenómeno a

los pueblos en lucha para romper sus estructuras de atraso, preservadoras del privilegio.

El «mayo francés» de 1968 puso en evidencia que elementos a los que no se podría calificar de marginados, ni tampoco de inadaptados, también podían rechazar los conflictos y las contradicciones de una sociedad altamente industrializada y próspera, mediante el empleo de la violencia.

La violencia está por todas partes, omnipresente y multiforme, brutal, abierta, sutil, insidiosa, disimulada, racionalizada, científica, condenada, solidificada, consolidada, anónima, abstracta e irresponsable, ha dicho monseñor Helder Cámara; y agrega: no es el momento de preguntarse si la revolución estructural que el mundo precisa supone necesariamente la violencia. Es preciso observar que la violencia así existe y es ejercida de modo inconsciente algunas veces por aquellos mismos que la denuncian como un flagelo para la sociedad.

Si bien nosotros aceptamos tal realidad, desechamos de plano la conclusión fácil que interesadamente pretenden extraer de la difusión del fenómeno quienes afirman que la violencia es algo insito a la personalidad humana.

La violencia, su espíritu y su deseo, no caracterizan al hombre; y, por el contrario, si algo hay íntimamente unido al ser racional es su tendencia, su vocación y hasta su amor, diría, por la paz.

Si nosotros aceptásemos que la violencia es algo propio del hombre, tendríamos que admitir en consecuencia que constituye un fenómeno inevitable y que la convivencia humana es una utopía; y no es así, señor presidente. La violencia surge donde impera la injusticia social. Si un gobierno elegido por el pueblo no defiende e interpreta al mismo, lo traiciona, y necesariamente crea una situación violenta para mantenerse contrariando las aspiraciones populares. Si se llega al gobierno por la fuerza, usurpando el poder que sólo al pueblo pertenece, con más razón hará falta la violencia ab initio para proteger a la clase dominante que usurpó aquél.

El hombre es dinámico por naturaleza y los pueblos por esa esencia misma de sus componentes individuales anhelan cambiar, cada uno, a su ritmo; cada cual a su manera y con su alcance distinto; pero todos llevan el germen de sociedades e instituciones dinámicas.

Los países estables son aquellos que cambian de acuerdo a las necesidades y a los deseos de sus pueblos, y de ninguna manera lo son los que se estratifican y los que se detienen.

Cuando una nación paraliza su marcha o sus gobernantes le imponen un ritmo de cambio que no es el querido por los pueblos, que no condice con los reclamos populares, nace la violencia. Los que manejan el timón del Estado necesariamente, en este caso, tendrán que crear las estructuras indispensables, adecuadas para desarrollar la voluntad de cambio que emana de los

integrantes de toda esa sociedad. Y la consecuencia es inevitable: se ha roto entonces la solidaridad humana, reina la coacción para sostener el statu quo y se difunde la contraviolencia en distintas manifestaciones para lograr los cambios que se niegan desde el gobierno.

El fenómeno de la violencia tiene características diferentes según se trate de países desarrollados o de países en vías de desarrollo. En los primeros se crean las situaciones de violencia que se exportan por la penetración imperialista a las naciones dependientes que deben soportarlas. Sin perjuicio de ello, las propias contradicciones de estas sociedades desarrolladas incuban en su seno situaciones de arrebatos que se oponen al descontento del pueblo por necesidades insatisfechas, entre las que deben mencionarse las inquietudes de las nuevas generaciones que anhelan una sociedad más justa, regida por valores auténticos, que chocan con las líneas colonialistas predominantes en esas sociedades desarrolladas.

En las sociedades subdesarrolladas, las estructuras vigentes no responden a las necesidades de la población, ni en lo político, ni en lo educacional, ni en lo económico, ni en lo social. El poder se concentra en manos de una clase dominante integrada por minorías oligárquicas que van rotando sucesivamente en el poder. Son los opresores que en la explotación y en la injusticia ejercen coacción contra los oprimidos, temen a la libertad porque su ejercicio es el riesgo de un cambio de la relación arbitraria existente hasta ese momento. Como dice Paulo Freire, una vez establecida la relación opresora está instaurada la violencia. De ahí que en la historia ésta jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si, precisamente, la existencia misma de esos oprimidos es el resultado de la violencia? Son los que oprimen los que engendran la coacción; son los que explotan, los que odian, los que tiranizan, los que abusan de la fuerza.

El grupo opresor teje toda una red con los hilos de la violencia. La policía y las fuerzas armadas se ponen a su servicio. Los medios de comunicación colectiva se censuran o se autocensuran. Cualquiera que pretenda abrir o romper esta red en pos de condiciones de vida más humanas es un enemigo del régimen. La hipocresía de éste pretende cambiar los términos de la situación: quien resiste a la opresión pone en peligro la legalidad e incurre en la subversión. El sistema sólo admite a los complacientes o a los indiferentes que no molestan; el que se opone, si es obrero es extremista, si es político es destructivo, si es intelectual es disolvente. No cabe duda alguna, entonces, que esta violencia que califica la vida moderna es el resultado de una sociedad injusta en la que unos seres humanos oprimen a los otros. Y en esta situación opresora la violencia toma distintas formas. Hay violencia estructural cuando una minoría usu-

fructúa para sí todo el acervo tecnológico, que pertenece a toda la humanidad, y cuando pone los resortes económicos a su servicio. Hay violencia institucionalizada cuando se racionaliza y se ordena la opresión en estructuras que engarzan a las sociedades subdesarrolladas en la dependencia económica de las naciones industrializadas. Hay violencia educativa cuando la enseñanza sirve a los intereses de la minoría gobernante; se prepara al joven para que tenga éxito en la sociedad de consumo, o para que la acepte o para que, en definitiva, se resigne ante la misma.

En el contexto descrito de la violencia, la rebeldía juvenil ante una sociedad enferma no admite comprensión; la sociedad opresora puede matar impunemente la vida nueva o industrializarla en el alcohol, la pornografía y las drogas, y la hipocresía del sistema vuelve una vez más a aflorar mostrándose como una sociedad justa, la que, en realidad, se asienta sobre bases corrompidas. La violencia sistemática, estructural, institucionalizada es la que engendra también la contraviolencia.

El panorama sociológico-político descrito en ámbito amplio mundial es el que marca asimismo las notas de la violencia en la Argentina en los últimos siete años.

El 28 de junio de 1966 fue desalojado del poder —como ya se ha dicho antes— el presidente Arturo Illia. Su gobierno se había caracterizado por el enfrentamiento a los monopolios internacionales o empresas multinacionales, como se las llama ahora con una benignidad digna de mejor causa. Ese enfrentamiento se había hecho crítico en el campo de los hidrocarburos, de la energía eléctrica y del comercio exterior, particularmente de granos, al igual que en otros aspectos en que los intereses extranacionales y sus aliados locales habían sido seriamente lesionados por las medidas económicas de un gobierno que reivindicaba en todos y cada uno de sus actos nuestra soberanía nacional.

Los monopolios internacionales afectados no podían entonces perdonar el desplazamiento del poder económico al campo nacional que se estaba operando y que prometía la consolidación de un sistema en el que la economía salía de su postración. La satisfacción de las necesidades populares era un imperativo; las elecciones libres y la plena vigencia de las libertades y derechos fundamentales eran la esencia del sistema democrático. Y empleo el término «democracia» con su auténtica acepción y no en la manoseada tergiversación de quienes lo han identificado con concepciones capitalistas y liberales y quienes pese a sus invocaciones no han titubeado en escarnecer a esa democracia que mentan.

No he de hacer aquí el análisis de ese período positivo de nuestra historia en consideración a la celeridad que queremos imprimir a este debate. Pero sí debemos señalar sin agravios, pero

con auténtica objetividad, que fueron esos intereses ocultos y bastardos los que derrocaron, al cabo de treinta y dos meses de realizaciones, al gobierno de Arturo Illia, valiéndose de un grupo de hombres de armas que, aspiro, pasen a ser en la hora de la reconstrucción de la República, maestros negativos de las nuevas generaciones militares, o ejemplos de lo que nunca se debe hacer: usurpar el poder popular cuando lo ejerce un gobierno respetuoso de la Constitución Nacional.

Y anhelo, así mismo, que cuando se desentrañe el alcance del rol militar de aquel entonces, los ejemplos de las jóvenes generaciones de las fuerzas armadas sean generales como Rosas, Soria y Caro, que supieron pasar a retiro cuando se marginó la Ley Fundamental, que ellos juraron defender.

Sr. Caro. — Agradezco, señor senador, la referencia al ilustre general Caro.

Sr. Solari Yrigoyen. — Es un acto de justicia, señor senador.

El nuevo sistema instaurado por los grupos triunfantes en 1966 significaba un regreso imposible en la historia a un sistema capitalista despiadado y a una economía de dependencia y satelismo. A poco andar, los resultados quedaron a la vista. El incremento de la desocupación, la expansión de la marginalidad social y la desigualdad clasista de ingresos en desmedro de los sectores populares mostraban la esencia del régimen de la denominada «revolución argentina».

El gobierno militar necesitaba contar con una clase dirigente económica, política, sindical y universitaria alienada y contó con ella y con su complacencia. El ejercicio de las libertades quedó en manos de la policía y de las fuerzas armadas. Para quienes no entraron en la complacencia o en el consenso, como se lo llamó con jactancia y hasta con falacia, se construyó paso a paso el aparato represivo apto para ejecutar la violencia necesaria para desarticular cualquier movilización popular.

Con el tiempo no dudo que la exégesis histórica coincidirá en resaltar que lo más positivo que ha tenido esta época que termino de reseñar, es la rebeldía popular que se manifestó en diversos hechos, pero fundamentalmente en esa síntesis de la resistencia a la opresión y en favor de los derechos del pueblo conculcados o suprimidos, que fue el cordobazo.

Un integrante del Ejército, colaborador del gobierno defacto, ha dicho con razón —me refiero al general Juan Guglielmelli— en un estudio sobre las fuerzas armadas y la subversión interior, que si se acepta que los conflictos y rupturas de la cohesión de la comunidad nacional se originan en la opresión que sufren los sectores sociales angustiados por una situación económica que no satisface sus propias aspiraciones, la función de las fuerzas armadas, como parte de la comunidad, no debe limitarse a res-

guardar el orden o reprimir la subversión. Expresa el mismo militar que nuestra Nación se ha forjado a través de largas y cruentas guerras civiles.

De ellas salieron nuestras instituciones. Recuerda las revoluciones violentas como las del 74, 80, 90, 93 y 1905, estas tres últimas inspiradas por el radicalismo y que estuvieron motivadas por razones profundas que existían con anticipación a los estallidos espontáneos. Y luego recomienda Guglielmeli efectuar el análisis de los fenómenos actuales con igual serenidad.

Nosotros discrepamos con la posición de los teóricos de la violencia revolucionaria que, desde Sorel a Fanon, la indican como el único medio de oponerse a un orden social congelado por minorías que no admiten ningún traspaso del poder; pero aquí hay que ser claros en poner al descubierto, así, descarnadamente, que en el ciclo que ayer concluyó la principal fuente de violencia provenía de las minorías que no aceptaron en modo alguno coartar sus privilegios. Y sobre esta afirmación hay que insistir, puesto que quienes la ejercitaron trataron de recubrir la verdad que estoy denunciando con apelación a «vocación de sacrificio» y otras semejantes mientras la violencia institucionalizada que había depuesto al presidente constitucional con policías lanzagases, había irrumpido en la universidad a golpes y cachiporrazos y había tomado los sindicatos disidentes a punta de ametralladora como comienzo de un período signado por el empleo de la fuerza; estos cuerpos tuvieron la pretensión de constituir «la legalidad». A estos herejes del cuerpo político, usando la terminología de Maritain, hay que decirles que de nada vale la tergiversación permanente de los conceptos. Bien lo decía Cristo, según lo registra San Mateo: «No todo aquel que me dice ¡Señor! ¡Señor! entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».

En la hora del triunfo de la soberanía popular, tras múltiples sacrificios y sacrificados para lograrla, queremos iniciar una nueva etapa de concordia, una etapa que tiene fines superiores y que reclama cambios trascendentes. Es justo entonces que nuestra primera preocupación sea cerrar el ciclo con una amnistía amplia y generosa para los delitos políticos, los delitos comunes conexos y los delitos militares también conexos.

El olvido comprende a todos sin excepción, tanto a los perseguidos de ayer como a los perseguidores que hubieran cometido este tipo de delito. De más está decir —como lo ha señalado mi compañero de bloque— que damos al delito político el alcance real de quienes han sido impulsados por un ideal noble y altruista, como se expresa en los fundamentos de nuestro proyecto, excluyendo de la ley a los delitos comunes que no tienen esas notas distintivas, como no las tienen las torturas, por ejemplo, o los

casos que ha señalado el señor senador Martiarena de abuso de poder.

Deseamos también terminar con ese tribunal repugnante a nuestra Constitución, que conozco muy bien por haber actuado en él intensamente como defensor en su triste existencia. Ese tribunal repugna a nuestra Constitución porque ésta prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales y en provincia extraña a la que se hubiere cometido el delito, como se consigna en los artículos 18 y 102 de la Carta Magna.

Queremos también concluir con toda la legislación represiva. Aun más, deseamos hacer un estudio a fondo de todas las normas que tengan esa connotación y que en este momento no se derogan, para que con urgencia podamos hacerlo y no quede ni vestigio de ese tipo de legislación en el país.

Como legisladores del radicalismo cumplimos con un mandato de nuestra doctrina, recogida en todos los documentos partidarios, particularmente los del comité nacional en estos últimos tiempos, y también en la práctica auténtica de la democracia que han hecho todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales del radicalismo en los 83 años de su historia.

Pero nuestro reclamo, señor presidente, para terminar, no se agota en la restauración de las libertades fundamentales, de las libertades públicas, por cierto bien importantes. Somos radicales que creemos en el avance continuo de nuestras ideas, y por eso nosotros también hoy lanzamos nuestro desafío a todos los sectores populares que integran este Parlamento, libremente elegido, para trabajar en una tarea legislativa que tienda a remover desde sus cimientos, en todo lo que haga falta, las bases de la sociedad en que vivimos para terminar con los privilegios que están negando permanentemente la libertad y también la justicia. (Aplausos.)

Sr. Cerro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Cerro. — Señor presidente: con emoción no disimulada entramos a este debate, que hubiéramos deseado más amplio, con mayor tiempo, con menos intranquilidad. Pero sabemos que la urgencia en el tratamiento de este proyecto deriva de la urgencia de los hechos mismos. Es el país el que está reclamando una ley de olvido.

No queremos dilatar innecesariamente este debate en un tema relacionado íntimamente con la dignidad de la persona humana. Está en juego nada menos que la libertad de hombres y mujeres argentinos.

Es cierto que quizá la urgencia de esa libertad ha disminuido un tanto con el indulto otorgado por el Poder Ejecutivo en la noche de ayer, indulto que en nuestro proyecto contemplábamos en dos artículos, para el caso de que así ocurriera, y que ahora, indudablemente, han perdido actualidad ante la decisión del Poder Ejecutivo nacional.

Como lo dijimos en la primera sesión preparatoria de este Honorable Senado cuando apoyamos con nuestro voto a los candidatos del bloque mayoritario para integrar la mesa directiva del cuerpo, ello no significaba enajenar la independencia de nuestro bloque, sino que era índice de una disposición positiva de nuestro ánimo de apoyar con nuestro voto las iniciativas de cualquier sector político de este Honorable Senado si llevaban a hacer realidad la institucionalización del país y a realizar un verdadero programa de liberación. Consecuencia de esa independencia y de esa disposición de ánimo ha sido el proyecto que como senador de la Alianza Popular Revolucionaria, y juntamente con los diputados del mismo sector político, hicimos llegar a las respectivas Cámaras a que pertenecemos. Creímos que era un instrumento amplio, apto, generoso, para obtener ese manto de olvido que el país reclama. No buscaba contraponerse a los proyectos de los otros sectores sino integrarse con ellos. Era un aporte positivo, y por eso es que adelanto el apoyo de nuestro voto en favor de los proyectos del Poder Ejecutivo nacional en esta consideración en general.

Vivimos un momento histórico. Por eso decía al empezar que entramos con emoción no disimulada a este debate. Tenemos que enfrentar con coraje las cosas nuevas; y por ello, uniéndome a la alegría de todo el pueblo argentino, como bien se ha dicho en este recinto, sin distinción de sectores —alegría del pueblo que vimos expresada en las calles de esta Capital el día de ayer—, quiero reivindicar en esta tarde el concepto de lo político y de los políticos, que ha sido vituperado en estos últimos siete años en forma agravante, o, diríamos más, infamante, hasta hacer creer, o por lo menos creer que así hacían creer al país, que los políticos tenían acaecido en nuestra patria. Esto sembró desesperanza en el pueblo, falta de fe en el gobierno civil y vacíos de poder, que han llevado a la terrible costumbre de que las fuerzas armadas vengan a desalojar a los legítimos representantes del pueblo de la función de gobierno.

El tiempo nos obliga a ser breves. Nos hubiera gustado incursionar en algunos de los temas brillantemente expuestos por los senadores preopinantes. El terrorismo, la violencia, los secuestros, los asesinatos, las torturas, no son episodios aislados. Tenemos que ubicarlos en el momento histórico que estamos viviendo. Es un problema de dimensión mundial, no solamente argentino. Hay un mundo que muere, y nos toca desde nuestro modesto lugar edificar esta nueva edad histórica que nace, que queremos hacerla construyendo una sociedad más justa y más humana, para legarla con orgullo y honor a nuestros hijos.

Y en ese contexto de dimensión mundial los pueblos pobres, hartos de explotación, interpelan a los pueblos ricos. Hispanoamérica está en ese

contexto, y la Argentina en Hispanoamérica está hermanada al llamado tercer mundo.

Bien dijo ayer en su mensaje al pueblo de la Nación el señor presidente, que una de las metas de su gobierno debe ser lograr la integración latinoamericana. También es norte y guía de nuestro accionar político el lograr esa integración continental. Y en el orden de nuestro país la crisis ha calado muy hondo.

Por ello, es voz repetida que compartimos que un solo sector político, por mayoritario que sea, no podrá hacer la reconstrucción del país. Es tarea de todos, y a ella todos estamos obligados.

La Alianza Popular Revolucionaria salió a la calle esgrimiendo esa bandera: convocando a todos los sectores que están por lo que se ha llamado la lucha por la liberación del país, para que unidos edifiquemos ese nuevo gran proyecto argentino que esta generación está reclamando.

En ese contexto ubicamos la ley de amnistía. No nos equivoquemos. No tenemos la ingenuidad de creer que sancionada la ley suprimiremos la violencia en el país. Tampoco se engañe el pueblo si cree que ésa es la posición de sus parlamentarios. Pero creo que es un primer gran paso. No lo es todo, pero es un paso muy importante, y por ello no hemos vacilado en aceptar que este debate se realice con celeridad excepcional, hasta constreñirnos voluntariamente en el tiempo que podamos usar de la palabra, así como disminuir nuestras intervenciones, con tal de darle al país esta ley del olvido que está reclamando.

Pero si queremos recalcar que estamos convencidos también que si esta ley del olvido no va acompañada realmente de medidas revolucionarias, de una gran política de cambio no declamada sino efectiva, concretada en los hechos, como decía ayer en su mensaje presidencial el doctor Cámpora, no obtendremos los frutos a que aspiramos, y la violencia volverá a reducirse, aun con gobierno constitucional.

Desde nuestro punto de vista político, reclamamos la vigencia de un humanismo integral, pleno, al decir de Paulo VI «que abarque todo el hombre y todos los hombres».

Queremos la realización de un programa que sea una alternativa de desarrollo no capitalista. Un desarrollo fundado en el trabajo, en la disciplina, en el ahorro, sin endeudamiento masivo con la extranjería, sin enajenar nuestra capacidad de decisión, que socialice estructuras económicas, políticas y culturales, aniquilando los mecanismos de expoliación que conocemos. Y queremos terminar con los dos colonialismos, no solamente con el externo, y esto lo digo con énfasis, como hombre del interior, sino también con el interno; queremos terminar con las dos Argentinas, con la Argentina del puerto y con la Argentina postergada.

Hombres del interior que vemos la postergación injusta, inicua, permanente, histórica, de nuestras provincias; diríamos incluso que su-

frimos la desintegración geográfica del país, queremos reclamar en este primer día de sesiones ordinarias la atención del Parlamento argentino sobre toda esa Argentina postergada. (Aplausos.)

La violencia es un signo de los tiempos; es un instrumento, es ambivalente; se legitima por sus fines.

Nos hubiera gustado entrar en ese tema de debate. En honor a la brevedad lo dejamos de lado y suscribimos en gran parte la seria exposición del señor senador preopinante.

Estamos convencidos de la necesidad de la ley de amnistía; de que al hacerlo interpretamos lo que el pueblo quiere; de que todos los sectores están en esa línea. La Iglesia también lo está. Baste recordar las reflexiones para el año 1973 del obispo de Goya, monseñor Devoto, cuando calificaba a este sistema capitalista como «algo históricamente terminado y que no puede ya dar nada más», y señalaba la necesidad de suplantarlos por un socialismo cristiano y nacional; cuando calificaba de «masacre infame la de Trelew» y criticaba la existencia de una «legislación inhumana y de un tratamiento inhumano para los presos políticos». No son palabras ya de los políticos sino de un pastor de la Iglesia.

La Alianza Popular Revolucionaria está contra toda forma de represión ideológica; por ello propiciamos la derogación de las leyes represivas. No somos ingenuos políticos: sabemos que la democracia debe defenderse. Pero no queremos que la forma de defender la democracia sea el establecimiento de dictaduras. La democracia debe defenderse con medios democráticos.

Como decía bien ese gran filósofo que entró hace pocos días en la inmortalidad, Jacques Maritain, «la democracia no debe perder nunca la razón para salvar la vida».

Coincidimos con una amnistía amplia y generosa, pero nuestro proyecto tiene aspectos distintivos, algunos de los cuales mencionaremos en oportunidad del tratamiento en particular, pero que queremos adelantar también en este momento. Nuestro artículo 5º, que, dada la forma como hemos aprobado el tratamiento del asunto, me permitiré leer, con permiso de la Presidencia, dice lo siguiente: «Los delitos en que hubieren incurrido empleados o funcionarios públicos, y tipificados en los artículos 79 y 80; artículos 89 a 93; artículos 141 a 144 inclusive, y los comprendidos en los capítulos VIII y IX bis del título XI del libro II del Código Penal, se presumen cometidos sin los móviles contemplados en los artículos 1º, 2 y 3 de la presente ley» —se refiere a los políticos— «salvo prueba en contrario producida por los interesados, aunque se invocara móvil político u orden superior. Esta presunción alcanza a quienes, no siendo empleados o funcionarios públicos, hayan cola-

borado en la comisión de delitos enumerados en el párrafo anterior, cualquiera sea el grado de su participación criminal.»

¿Qué queremos con este artículo? Deseamos terminar con la tortura sistemática, con las policías que se convierten en sistemas de represión y no en guardianes del orden. Queremos que esta ley de amnistía no se entienda como una legalización de la tortura sistemática y de los vejámenes. Bien lo expresó el señor senador Martiarena al hacer uso de la palabra: está sobrentendido en el proyecto de la mayoría —lo comprendemos perfectamente, pero queremos que no solamente esté implícito, sino expresamente afirmado— que éstos son delitos comunes. Por eso la presunción de serlo, salvo prueba en contrario, permite incluirlos en los delitos políticos. Al respecto también hizo unas observaciones muy atinadas el senador De la Rúa.

Queremos que este proyecto de ley que presentamos, en esa parte sirva de elemento ejemplarizador de conductas futuras, para que de una vez por todas en nuestro país sea realidad el anhelo de los Constituyentes de 1853: «Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas».

En honor a la brevedad dejamos de lado otras consideraciones, sin perjuicio de volver sobre el tema y de hacer aportes que creemos positivos en el momento del tratamiento en particular del proyecto.

Quiero terminar expresando un anhelo en la sesión de esta tarde: los cuerpos deliberativos como el Senado de la Nación deben ser laboratorios de razón y discusión. Los tiempos nuevos, en eso que se ha llamado por muchos «la crisis del Parlamento», imponen con las disciplinas de bloque un modo distinto a veces de razonar y coincidir. Hoy hemos tenido un ejemplo de convivencia fraterna entre los integrantes de distintos sectores políticos. Siguiendo lo que he anunciado como mi futura conducta política en este cuerpo, de apoyar las iniciativas que lleven al bien del país y a la realización de un programa de liberación, de cambios revolucionarios, cualquiera sea el sector político al que pertenezcan, apoyo con todo entusiasmo el proyecto del Poder Ejecutivo, porque creo que más allá de las discrepancias de detalle sirve de instrumento para realizar los fines que persigue.

¡Quiera Dios que iniciemos con paso firme este camino de la reconstrucción nacional!; para ello hemos sido elegidos. Pero que sepamos responder ante las futuras generaciones de la responsabilidad que debe asumir la nuestra. Como dijera un profesor universitario: quizá esta generación madura que representamos en este Senado de la República no esté destinada a brillar con las luces de los grandes héroes; quizá nuestro papel sea el del heroísmo silencioso, un heroísmo de cimiento. No importa, con tal que

seamos los cimrientos del edificio de ese nuevo gran proyecto argentino que queremos legar a nuestra posteridad. Nada más. (*Aplausos.*)

Sr. Muniagurria. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Muniagurria. — Hablo en nombre de la democracia progresista, a la que pertenezco, y tengo el honor de hacerlo también por la Confederación Popular Federalista, que me ha conferido su representación en este debate en general.

Me hago eco de las sugerencias del señor miembro informante de la mayoría señor senador Martiarena, y no me voy a extender en consideraciones que se aparten fundamentalmente del tema específico del debate que estamos tratando.

No obstante ello, quisiera formular algunas reflexiones que me he hecho a mí mismo y que quisiera transmitir a este honorable cuerpo y a los señores senadores que ocupan estas bancas.

Un escrutinio es siempre la averiguación de un resultado. El último resultado electoral ha señalado una realidad política y social en la vida de la Nación. El país ha demostrado, como consecuencia de ese comicio, que tiene dos posiciones perfectamente definidas. Hay un grupo de la población, integrado por hombres y mujeres argentinos, que sigue una corriente y una orientación política y social que actualmente se encuentra en el gobierno; y hay otro grupo que, por el contrario y con distintos matices, no participa de esa concepción y está prácticamente en la posición opuesta.

Es decir, que existe una real división en el pueblo argentino. ¿Puede eso llevarnos a la conclusión de que debemos enfrentarnos necesariamente los unos contra los otros? ¿O acaso no ocurre, en nuestro país, lo mismo que está ocurriendo en el mundo? ¿Acaso el mundo, el universo, en nuestro tiempo no está totalmente dividido y marcando grandes líneas en dos ámbitos y posiciones distintas? Sin embargo, los hechos últimos han demostrado que se tienden puentes de acercamiento y de comprensión. Lo hacen los grandes estadistas; lo ha hecho el señor Nixon visitando a la China de Mao, a Rusia, al Kremlin y a los grandes jerarcas de la Rusia soviética, y lo acaba de hacer el señor Brezhnev visitando a la Alemania de Bonn en la persona de su canciller Willy Brandt.

Es decir, la realidad que nos toca vivir está señalando la posibilidad y la necesidad de la coexistencia y de la convivencia. Yo diría que basta la coexistencia, porque convivir tiene ya un valor de tipo anímico y de acercamiento espiritual que en las grandes masas, en los pueblos e incluso en las individualidades, no se puede referir a todos los que son protagonistas del proceso. Pero hay una coexistencia, y para coexistir es necesario pacificar.

Estimo y considero que la ley que está tratando la Honorable Cámara es un instrumento de pacificación por antonomasia. La ley de amnistía lleva como finalidad fundamental en su sanción, en su propósito, en su contenido, alcanzar la paz. Yo no podría, no obstante la idoneidad de la exposición del señor senador Martiarena, dejar de mencionar muy brevemente que tenemos, en lo que hace a la democracia progresista, antecedentes que nos conducen y llevan a sostener la amplitud y generosidad de las normas vinculadas a la sanción de una ley de amnistía.

Así lo hicimos en el año 1932 en un debate en el que el señor presidente de esta Honorable Cámara y vicepresidente de la República, doctor Vicente Solano Lima, tuvo también participación, y en el cual el diputado por Santa Fe de esa época, Gregorio Parera, en un —a mi juicio— extraordinario discurso lleva a la consideración de la Honorable Cámara el contenido y el pensamiento de lo que debe ser una ley de amnistía amplia, que va mucho más allá del delito específicamente político para comprender lo que —como se ha dicho con elocuencia y conocimiento por otros señores senadores— también se denomina delito conexo del delito político.

Es que, señor presidente, hay que partir de la base de que la amnistía no es la justicia. ¿Cómo suponer que la amnistía se puede identificar con un valor absoluto en lo que es la estimación axiológica de los valores —valga la tautología— con un valor como es la justicia? No; la amnistía es un substitutivo bondadoso de la justicia. Y lo es porque está destinado a buscar, precisamente, lo que acabo de señalar: la paz.

Ocurre —y si los señores senadores me permiten una referencia brevísima— lo que suele suceder también en el derecho privado con la institución llamada prescripción. Cuando una obligación prescribe no se logra la justicia, pero se logra la paz social, y tanto es así que esa obligación no queda extinguida, se transforma —como lo saben los juristas de esta Cámara— en la llamada obligación de tipo natural; es decir, prescripción para el derecho privado y amnistía para el derecho público. Finalidad: la paz, la pacificación.

Yo no podría haberme referido a ese debate de 1932 sin dejar de mencionar, también, algunas apreciaciones que se formularon en el desarrollo de la controversia parlamentaria acerca del espíritu que debe animar la amnistía. En ese momento, en que estaban todavía encendidas muchas pasiones y se acababa de salir de la revolución del 6 de septiembre, en el debate se evocan antecedentes tan significativos como el que se produce después de la rebelión del 70 de Ricardo López Jordán en Entre Ríos, que se inicia nada menos que con el horrendo crimen del asesinato de Urquiza; y sin embargo, por la san-

ción que hace el Congreso en la oportunidad pertinente, al considerar la amnistía para los protagonistas de esos hechos, quedaron cubiertos por el manto del olvido.

En esa oportunidad, Lucio Mansilla, a quien se lo recuerda históricamente por su personalidad extraordinaria, singular, y por su talento y su brillo, al referirse a la amnistía, decía que era el olvido; y gracias a esas palabras mágicas del vencedor de Caseros, la República está constituida. El pasado es un abismo de sangre en el que todos han metido el brazo hasta el codo, tanto los unitarios como los federales.

Los delitos comunes hacen al juicio como mención técnica, según la tradición de las leyes de aquel tiempo. Pero en esta materia hay una jurisprudencia abundante que no está en mi ánimo mencionar, pero que no se puede excluir del recuerdo: el caso concreto de Severo Chumbita, quien aparece comprendido por un pronunciamiento de la Corte, dentro de las normas de la ley de amnistía, como está perfectamente establecido en el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en la serie 3ª, tomo 13, página 204 de la colección de fallos de ese tribunal. Es decir, que la terminología y la técnica de la ley están fundamentalmente destinadas a establecer la conexión entre el delito que tiene una finalidad superior, que se presume en el delito político, y el delito que es el medio o el accesorio para la comisión del hecho fundamental, que es el delito conexo.

No obstante eso, en el proyecto del Poder Ejecutivo que traduce —no voy a negarlo porque es evidente— un espíritu de amplitud y de generosidad, no se hace mención específica a esa tradición legislativa y jurisprudencial argentina relativa a la conexión del delito común, eventualmente, con el delito denominado político.

No importa ello a la esencia del problema. Yo anticipo, señor presidente, que el grupo que tengo el honor de representar, va a apoyar, en general, y con esta característica de amplitud que acabo de formular, los proyectos que están a consideración de la Honorable Cámara, sin perjuicio de que los señores senadores que integran la Confederación Popular Federalista y el que habla también, llegado el momento de la consideración en particular, retengan el derecho de formular las apreciaciones que consideren convenientes a los fines de dejar sentados y establecidos los propósitos que animan su criterio.

Yo quiero ser muy breve, señor presidente. Acabo de expresar cuál es el ánimo que nos lleva a participar en este debate. Lo que he dicho de la ley de amnistía, lo reitero y ratifico en lo que hace también a lo que estimo son leyes complementarias, como las leyes represivas y la restauración de las garantías de los procedimientos criminales. Pero quiero, para terminar mi discurso, formular algunas consideraciones.

La palabra amnistía, como todos sabemos, reconoce su filiación ideológica y gramatical en la palabra amnesia, el olvido. Amnistía se vincula también a la tregua, que significa que dos sectores que se han enfrentado el uno contra el otro estiman en un determinado momento conveniente deponer sus armas verbales o mortales, agresivas o materiales, para llegar a un período de tranquilidad que permita superar el enfrentamiento. Pero interpreto que, tanto la amnistía como la tregua, tienen una calidad que es esencial y que, si no juega en la emergencia, se desvirtúan y se desnaturalizan; tanto la tregua como la amnistía, en su espíritu, tienen que ser recíprocas, tienen que ser la expresión de la bilateralidad: yo olvido, pero quien fue hasta ayer mi adversario también olvida. Ello es, a mi juicio, lo más importante. El olvido es recíproco y la tregua exige también la reciprocidad y la bilateralidad en las posiciones, para afirmar su contenido y su esencia fundamental.

Lo digo, señor presidente, porque con otros hombres de mi grupo político hemos demostrado nuestra vocación para lograr la paz en el país.

También con hombres de otras fuerzas políticas —me complace en señalar que con representantes de la bancada de la mayoría, de la Unión Cívica Radical, del conservadurismo popular, etcétera—, y con individualidades tan significativas como la del colega el señor senador por San Juan doctor Leopoldo Bravo, constituimos la denominada Hora del Pueblo, inspirada fundamentalmente en un propósito superior de pacificación de la República.

Hace pocos días, creo que fue el 22 de este mes, me tocó asistir a una convocatoria que formuló el actual presidente de la República, doctor Cámpora, a todas las fuerzas políticas, para considerar lo que él mismo denominó una tregua política y social. Asistí en representación de mi partido, juntamente con su secretario general, doctor Horacio Thedy. Escuchamos y participamos no solamente en el propósito sino, inclusive, en el debate, subrayando nuestra disposición espiritual para que se alcanzase de una buena vez una tregua en esta hora en que, como se ha marcado aquí con acierto, pareciese que se inicia una nueva etapa en la vida de la República. Dejamos debidamente establecida nuestra buena disposición para ese fin.

El señor presidente de la República en la reunión de ayer anunció a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de amnistía que, naturalmente, tiene la misma filosofía que la de la tregua a que convocó días anteriores en la reunión a la que asistí, como acabo de expresar.

Yo me pregunto, señor presidente —porque si no lo hiciese confieso que no quedaría satisfecho de haber hecho uso de la palabra ante esta Honorable Cámara en esta sesión, a la que le otorgo una gran significación—, yo me pregunto, decía, si pueden compatibilizarse, si hay

armonía entre las expresiones que se han formulado en la reunión de la tregua y el proyecto de ley de amnistía que contiene el mensaje presidencial. Esta pregunta la hago con el debido respeto que me merece su autor, pero formulo una apreciación de tipo fundamentalmente político. ¿Hay correspondencia entre esa amnistía y un discurso, un mensaje, una exposición, que evoca los hechos del pasado y ofrece con su crónica minuciosa una imagen beligerante que no encuentro compatible con aquella intención? Esta afirmación corre por mi cuenta; la formulo como una expresión de deseos para que quede bien en claro que con la evocación de ese pasado, y en la medida en que ambos grupos ayer beligerantes no seamos capaces del olvido recíproco y de la bilateralidad de disposición, la tregua no será alcanzada y la amnistía no habrá de cumplir las finalidades que persigue.

Voy a hacer una brevísimas alusión a uno de los aspectos del proyecto. Me refiero al artículo 7º, con respecto al cual el señor senador Martiarena se adelantó a conjurar el evento de cualquier apreciación. Repito que los representantes de la Alianza Popular Federalista podrán formular algunas apreciaciones en la oportunidad correspondiente al tratamiento en particular. Pero desde ya quiero hacer una observación al texto del artículo 7º. Este termina expresando que el ministro de Justicia hará efectiva de inmediato la libertad de las personas comprendidas en esta situación, efectuando las comunicaciones pertinentes. Considero que el ministro de Justicia no puede tener facultades para discriminar si corresponde o no la libertad, o si una persona está comprendida o no en los alcances de la ley de amnistía que sancione el Congreso. A mi juicio, en el concepto de la división de los poderes no puede hacerlo. Chocaría con el principio establecido por la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la vinculación de la amplitud o rigidez de la norma fijada por la ley, a lo múltiple y variable que traduce el hecho concreto, y el hecho concreto es el que debe ser calificado por el juez. Eso ocurre en la ley de amnistía y en cualquiera de las leyes que han sido sancionadas por el Congreso y cuya aplicación compete a los magistrados. De ahí que esto no es pertinente en el texto de la ley. Debe reservarse una facultad de esta naturaleza exclusivamente al Poder Judicial.

Agradezco a la Honorable Cámara que haya tenido esta amable tolerancia con mi exposición. Anhele que la sanción de esta ley sea efectivamente un instrumento de paz para la República. (Aplausos.)

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente, señores senadores: participo en este debate con una profunda

fe en el destino de la Nación. Confío plenamente en la capacidad de patriotismo de toda la civilidad argentina. Con esa creencia, sostenemos que es deber común lograr entre todos los sectores el camino de la etapa nueva, del modelo diferente, de la sociedad dinámica que clama el pueblo de la Nación para que el país se ubique a la vanguardia de América latina y de las naciones más civilizadas y progresistas del mundo.

Esta no es la hora de nadie; es la hora de la patria. Es la hora del deber común. Ninguno tiene derecho a declararse sector no comprometido con respecto a los problemas del presente y del futuro de la República.

Tenemos la prueba de nuestras luchas opositoras y de nuestras obras de gobierno. No quemamos nuestros archivos ni pretendemos que los quememos nuestros adversarios. Pero sí queremos construir con el esfuerzo común la tarea emancipadora, liberadora, igualitaria, tolerante y fraterno que necesita la Nación.

Es la hora de la patria y podemos repetir con un gran pensamiento que la patria es el numen a quien es digno sacrificarlo todo. Queremos que la etapa que se inicia esté signada por el éxito del país. No somos gobierno. Somos fuerza de oposición y la ejercitaremos con sentido creador. Pero queremos que esta etapa sea el triunfo de toda la civilidad argentina.

Para ello hemos dado pruebas con respecto a lo que se debate de cuál es nuestro criterio y cuál será nuestro modo de actuar en este cuerpo. Dijimos ayer en reuniones oficiosas de comisiones y de bloques que postulábamos dos propósitos: primero el de que las coincidencias fueran entre todos los sectores, porque creemos que eso hace a la esencia y al respeto integral de la vida parlamentaria; en segundo lugar, que estábamos dispuestos en este debate, como en todos los que se sucedan, a llevar al sector del gobierno y al sector de la mayoría, o a los otros sectores cuando corresponda su calidad de autoría, nuestras inquietudes con limpieza y con lealtad para que busquemos el acierto. No buscamos la maniobra con el propósito de obtener el error ajeno.

Con esa decisión, nuestro bloque ha querido que este estudio se inspire en tres principios que hacen a un estatuto común: ley de amnistía, reconquista de las libertades públicas y reparación constitucional. Tal es el contenido que nosotros le asignamos.

Toda esta trilogía que el Poder Ejecutivo contempla en sus tres proyectos —como nuestras iniciativas— debe representar una especie de «acta de compromiso» que asumimos porque la ley de amnistía, la derogación de la legislación represiva, las normas sobre el fuero especial y la legislación penal *fin* son instrumentos académicos, teóricos o fruto de la exclusiva elaboración de gabinete.

Estas sanciones tienden a convertir todas sus normas en un estatuto de pacificación nacional,

pero para ello es necesario que la paz la quieran y la cumplan todos. Es decir, constituidos los poderes constitucionales, suprimido el imperio de la fuerza y de la anticonstitución, entran a actuar los canales de los poderes legítimos. Y por esa vía, todas las expresiones, todas las inquietudes y todas las aspiraciones tendrán su intérprete, su eco positivo y la concreción creadora.

Aquí, en este Senado, como en la Cámara de Diputados de la Nación, hay hombres de las distintas ideologías y de las distintas capas sociales. Nada pasará inadvertido y ningún problema será rehuido.

Esto implica nuestro mensaje de paz para todos los argentinos. Pero es también un compromiso para los propios que van a ser liberados. Ellos tendrán que convertirse, como nosotros, en protagonistas de esta misión de paz, de democracia, de liberación, de justa distribución de la riqueza, de reformas estructurales y de reconquista de los factores clave de la economía nacional.

De manera que cuando nosotros predicamos la paz lo hacemos con un sentido integral. ¡Cómo no hemos de comprender las justas rebeldías frente a las injusticias y la violencia contra la violencia! Existe el derecho legítimo de resistir a la opresión. Existe el acto de legítima defensa frente al absolutismo, la tiranía, la dictadura y también ante los graves flagelos de la injusticia social, la desnutrición, la mala vivienda, la desocupación y la falta de educación. Igual sabemos que con la violencia nada duradero podrá construirse.

Lo comprendemos. Nuestro mensaje es para propios y extraños, asumiendo como los primeros el propio compromiso. Decimos más: esta hora determina un balance común. Todos somos responsables de lo que ha pasado en el país, pero entre todos hay que encontrar las soluciones que necesita la República y nadie deberá repetir los errores del pasado.

El país espera mucho de esta prueba de la civilidad, y la civilidad tiene que demostrar que el patriotismo no está en crisis y que es capaz de gobernar la República, donde cada uno ocupe su propio rol, su propia órbita y su propio poder, donde todos sean debidamente respetados.

No hay escuelas sin maestros, no hay templos sin sacerdotes, no hay cuarteles sin soldados, pero no hay democracia sin pueblo y sin partidos políticos. Y no hay soberanía con sometimiento.

Para eso nosotros no queremos difundir de nuevo el germen del odio entre civiles, militares, clases sociales y sectores económicos.

Queremos que la Constitución sea el escudo protector de la República; que no quede, como decía fray Mamerto Esquiú, como un guante tendido sobre la arena, o, como sostenía Joaquín V. González, que no sea un grillete del Estado, pues es protección del árbol que crece. El so-

metimiento a la Constitución garantiza derechos y estipula obligaciones igualitarias. Sabemos que la vida de la Constitución es la muerte de la dictadura. Y creemos, con los Constituyentes del 53, que los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos.

Queremos que la Constitución respete a la espada y a la cruz, pero la cruz y la espada tienen que respetar a la Constitución y tienen que respetar el destino de un pueblo que nació para emanciparse y no para caer en la esclavitud económica o en el vasallaje con ningún otro poder de la tierra.

Por eso, en esta etapa creemos que el esfuerzo es de todos. Mucho se ha hecho para lograr la institucionalización del país; se han tenido que tributar muchos sacrificios y el país la ha logrado.

Pero esta acción argentina es decisiva en esta instancia, que no es cualquier instancia. Es una gran oportunidad nacional: se tiene que lograr la creación reestructuradora y emancipadora que necesita el país; hay que remover las causas que determinan la violencia, la injusticia social o el sometimiento económico.

Creemos, con conceptos de Wallace, que la economía no es un melón que lo pueden cortar a su antojo los grandes sectores internacionales y el poder de los trusts y los monopolios. Sostenemos que la economía tiene que estar al servicio del hombre, de la dignidad y de la liberación de los pueblos.

En ese sentido sostenemos que si esta prueba decisiva la sabemos cumplir será una digna etapa para la historia argentina, pero también será un mensaje vigoroso para América latina, que necesita de esta creencia en el pueblo, de esta fe en la libertad, en la democracia y en la liberación de las comunidades. Tenemos que vencer al subdesarrollo económico, al subdesarrollo social, al subdesarrollo humano, pero también debemos vencer al subdesarrollo jurídico e institucional que en América latina tanto crece, para que así no triunfe más el antipueblo, la dependencia y la antidemocracia.

Con respecto a este debate sostenemos la base substancial de esta fundamentación que he señalado. Recordamos e insistimos que no queremos más víctimas de la injusticia y rechazamos más privilegios para los victimarios. Deseamos que se pueda construir en esta hora de todos y que se logren las coincidencias, sin que ello implique la capitulación de ningún ideario o el sometimiento de ningún sector argentino.

La ley de amnistía y las otras iniciativas han sido analizadas ya por los señores De la Rúa y Solarí Yrigoyen, de nuestro sector. Ellos han fijado el criterio que nos anima. Sostenemos la decisión de apoyar los tres conceptos que animan al Poder Ejecutivo, porque así se reflejan en los tres proyectos que le pertenecen y así se tradu-

cen en nuestras dos iniciativas y en las reflexiones que se han formulado por la **representación** radical, que no son, señores senadores de la mayoría, para destruir los proyectos, sino para mejorarlos, hacerlos válidos, eficientes y plenos de vigor constitucional.

Consideramos que no es el instante de analizar la naturaleza jurídica de estos institutos, ni disponemos de tiempo para ello. Así lo hemos fijado en los debates de 1953 y 1956, a los que personalmente me remito como **interpretación** del rol, naturaleza jurídica y efectos de la amnistía y de estos sistemas de la legislación represiva que niegan al hombre y a la democracia.

Es sabido que amnistiar es la ley del **olvido**, como ha recordado el senador doctor **Martíarena**. Pero hoy es más que eso, es ley de pacificación; es herramienta gestora de un nuevo modo, de una nueva forma y nuevo estilo espiritual de la Nación.

La amnistía tiene un efecto reparador, y ojalá no tengamos que reunirnos más en los cuerpos deliberativos para tratar nuevos proyectos de amnistía o derogaciones de estatutos que implican tanta agresión.

Volver a la juridicidad es volver al estado de derecho que, como se ha señalado, no es el derecho del Estado. Es volver al gobierno de la libertad, que no es la libertad del gobierno. Representa un sentido nuevo y creador, que todos debemos construir porque el país forjará su futuro en un ámbito de seguridad jurídica y seguridad económica, de estabilidad institucional, de Parlamento respetado, de pueblo libre, con todos los sectores comprometidos en el hacer nacional.

Suprimir las agresiones de las leyes represivas es suprimir las agresiones al género humano, es abolir los tormentos físicos y también los tormentos ideológicos que martirizan al hombre y lo discriminan en tremenda aberración por la idea, por la raza y por la religión.

Quiero destacar que nosotros hemos dado nuestra plena decisión para que estos proyectos sean leyes en el día de hoy. Se ha fijado un tiempo limitado para nuestras exposiciones por sugerencia de la mayoría. No es esto una norma, pero lo hemos aceptado, excepcionalmente, porque estas leyes obedecen a una necesidad nacional. Es una especie de cumplimiento del compromiso contraído con el pueblo. Será un gran mensaje de fe y de revitalización de la confianza por parte de los sectores argentinos.

En ese sentido, creemos que no es la hora para levantar viejas o nuevas antinomias. No queremos más proscritos, más perseguidos, más injusticias, más torturados y más derrocamientos por la fuerza. Lo podemos decir con autoridad, porque en la oposición y en el gobierno no hemos perseguido a nadie. Hemos derogado la legislación represiva, hemos defendido las libertades públicas, y se ha dado, señor

presidente, la paradoja de que hoy el imperativo ha sido la vigencia de la **Constitución**, y el segundo reclamo lo ha constituido el ejercicio del sufragio por el pueblo.

Lo vivimos en nuestro gobierno: por respetar plenamente la Constitución nos condenaban como vacío de poder, y los que nos quitaron el poder se transformaron en el poder vacío.

La elección de 1965 se realizó con la participación de todos los sectores de la República, y personalmente creo, como lo sostienen nuestras iniciativas, que en el país deben participar como fuerzas electorales todos los sectores, y que el Partido Comunista no tiene que ser un **apéndice** en la clandestinidad, sino una fuerza participante con iguales deberes y derechos en la controversia de la democracia.

Creemos que es indispensable un sentido social profundo, al que se ha referido el señor senador por Santiago del Estero. Hay que derrotar la injusticia disociadora y defender al pueblo sufrido.

Pero es necesario comprender cuál es la disyuntiva de hoy. No es creer en las antinomias del pasado, pero también es no crear nuevas antinomias. Es encontrar coincidencias sin capitulaciones.

Es necesario lograr cuatro objetivos inmediatos: primero, la **recuperación** plena del poder para el pueblo; segundo, la reconquista del patrimonio nacional enajenado; tercero, un sistema económico-social de justa distribución de la riqueza y de profundas reformas estructurales, y cuarto, un Estado en la plenitud de su soberanía, con fraternidad, negociando y amigo de todos los pueblos, pero colonia de ninguno.

Nosotros aspiramos a que este debate sea también una toma de posición ideológica. Estas son leyes para pacificar y que permitan construir. Pero lo tienen que comprender todos. La **bilateralidad** a la que se refería el señor senador doctor Muniagurria tiene también que ser una **bilateralidad** en el respeto y logro de la paz. En ese sentido la opción de hoy no es como las anteriores antinomias. La opción es muy clara: con el país o contra el país; por el triunfo de esta etapa, que es de todos porque es de la **democracia**, o por la derrota de la civilidad.

En esa tarea nosotros estamos comprometidos. El período 1963/1966 marcó un jalón. Lo Presidió dignamente el doctor Arturo Illia, pero no es éste el momento de debatirlo. Pero el período 1966/1973 marca también la etapa de un **partido**, el radicalismo, respetuoso de todos, con un destacado líder, el doctor Ricardo **Balbín**, **predicador** de la paz pero preocupado. Por el **triunfo** de la civilidad en esta nueva etapa.

Somos una fuerza que hemos indicado hace mucho tiempo que la **liberación** está unida a la derrota de los privilegios y de los abusos: **económicos**.

Para eso es necesario que todos comprendamos nuestro deber. Confiamos en el país, pese a los errores circunstanciales. Tenemos que buscar lo que nos acerque y no lo que nos separe. Para eso los que gobiernan saben que han sido electos con el cincuenta por ciento de los sufragios. Nosotros estamos en el rol de oposición, pero para servir a la República y no para destruir el orden jurídico y la paz de los argentinos.

En esa tarea de construcción queremos que se comprenda que la violencia obedece a causas diversas y a muchas otras que aquí se han señalado. Nuestras observaciones y proyectos presentados hacen al mejoramiento de las iniciativas; cómo queremos defender la liberación del hombre y vencer a las injusticias sociales.

El sector que gobierna obtuvo el triunfo en elecciones libres con el cincuenta por ciento de la opinión electoral. Yo deseo que su gestión gubernativa sea tan acertada que llegue a apoyarla el ciento por ciento del país. Y esperamos la instancia de la rotación electoral para disputar el futuro gobierno. Mientras tanto, sabemos que vivimos en una sociedad transformadora, en un mundo en convulsión, diez mil veces más complicado y dinámico que el que enfrentaron y vivieron nuestros mayores. Sepamos realizar el cambio en profundidad y no solo el cambio en paz. Sepamos concretar la justa distribución de la riqueza. Sepamos abrir una etapa que, a decir de Albert Camus, «no tenga víctimas ni verdugos» y donde no perdure tampoco «la esclerosis de la mente y del corazón».

Para eso daremos todos los minutos para la patria, pero no daremos un solo segundo para la opresión, para la barbarie y para la explotación inhumana del hombre.

Construimos sabiendo que el poder es violento cuando es débil; que la sangre trae más sangre. Queremos paz, surcos, arados, industrias, energía, acero, desarrollo, educación, vivienda, salud, y lucharemos por una democracia integral de los trescientos sesenta y cinco días del año. ¡Ojalá que estas tres leyes sirvan para el logro de estos objetivos y que todos sepamos asumir el compromiso de construir una patria emancipada y la Nación en democracia! (Aplausos.)

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — Señor presidente, señores senadores: hablo en nombre del Partido Demócrata de Mendoza, al cual pertenezco, del Partido Autonomista de Corrientes y del Movimiento Popular Provincial de San Luis.

No puedo dejar de expresar la profunda satisfacción que experimento al hacer mi primera intervención parlamentaria en torno de un proyecto de ley que se sustenta en una filosofía hecha de generosidad y de grandeza.

La enorme expectativa pública que el proyecto de ley de amnistía ha generado en todos

los sectores del país hubiera justificado un análisis a fondo y un debate muy amplio del tema. Pero comprendemos la urgencia del caso y, consecuentemente, la necesidad de dar al proyecto de ley un trámite rápido, para que el gobierno constitucional inicie su tarea en las mejores condiciones posibles.

Por eso, aunque pudieran decirse sobre la amnistía muchas cosas, yo utilizaré muy pocas palabras. Omitiré referencias de tipo doctrinario, jurisprudencial o de legislación comparada y nacional, para ceñir mi exposición únicamente a algunos temas fundamentales que explican nuestro decidido apoyo a los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo nacional, particularmente al proyecto referido a la amnistía.

Este proyecto de ley apunta a una alta finalidad: lograr la pacificación y la unión de los argentinos y afianzar definitivamente el proceso institucional en el país. Se trata de crear un instrumento apto para que ese objetivo se logre, objetivo que no vacilo en calificar de decisivo en cuanto al normal y fecundo desarrollo de la etapa política que ahora se inicia.

Ello es así, porque sin paz interior serán vanos todos los esfuerzos que se hagan para cumplir con esa enorme tarea de fortalecimiento y desarrollo, que es el imperativo categórico de esta hora y la responsabilidad de todos, particularmente de quienes tienen en sus manos los resortes del poder.

Sin calma pública no será posible crear la riqueza necesaria para dar satisfacción a las necesidades de vastos sectores del pueblo argentino que viven en condiciones casi subhumanas, ni tampoco para que alcancen los beneficios a otros sectores que luchan desesperadamente por ascender en la escala social y económica.

Sin tranquilidad pública no darán frutos positivos los actos decididos de lucha contra el atraso y el estancamiento, contra toda forma de irritantes privilegios, ni tampoco podremos poner nuestra energía decidida al servicio de una mejor distribución de la riqueza colectiva y de una auténtica defensa del patrimonio nacional.

Pienso, por eso, que es fundamental hacer todos los esfuerzos e incluso sacrificios para restablecer y preservar en el país la concordia entre los argentinos, es decir, el profundo sentimiento de participar en una empresa común, de luchar por los mismos objetivos fundamentales, de estar unidos por los valores esenciales que conforman el ser nacional y de estar dispuestos a no ir en nuestras legítimas luchas y enfrentamientos, propios de una sociedad pluralista, más allá del punto donde quedaría comprometido el bienestar general, el interés colectivo y la grandeza nacional, es decir, señores senadores, el país, que será fuerte y grande en la medida en que todos los argentinos estemos firmemente unidos.

Creo que no podemos, de ninguna manera, demorar esta tarea. Por eso el voto favorable

que prestamos al proyecto en discusión se sustenta en la profunda convicción de que con ello contribuimos a la pacificación del país, tan golpeado últimamente por la violencia.

No voy a hacer un análisis profundo del tema de la violencia. No voy a rastrear en la historia para descubrir su génesis ni voy a intentar hacer una filosofía de la violencia. El señor senador Solari Yrigoyen se ha referido con gran veración y elocuencia al tema. Pero yo no sería honesto conmigo mismo ni con este honorable cuerpo si no transmitiera una inquietud que tengo al respecto.

En momentos en que nadie discute la importancia fundamental que tiene la acción del Estado en distintas áreas de la actividad comunitaria, particularmente en lo económico y social; en momentos en que en todos los países más adelantados de la tierra se asigna a la función del Estado un papel preponderante de control, de equilibrio y de estímulo de las actividades privadas, en esos momentos, nosotros hemos asistido —empleo el pasado porque deseo que no podamos seguir contemplándolo— al espectáculo de una suerte de disputa entre personas y grupos particulares por una parte y el Estado por la otra, respecto del manejo, del empleo de la fuerza, negándose así al Estado el ejercicio de un legítimo monopolio. Yo sé que esta palabra es antipática, pero creo que éste debe ser el único monopolio legítimo: el del empleo de la fuerza.

Cuando se cuestiona al Estado el empleo de la fuerza se está atentando contra su misma existencia. El Estado surge cuando a la defensa privada la sustituye la defensa pública de la seguridad de los habitantes del país. En este momento, señores, no puedo dejar de llamar la atención sobre este fenómeno, y lo hago porque si nuestro aparato estatal no es puesto en las condiciones de buen funcionamiento que corresponde, los planes de bien público enunciados ayer por el señor presidente de la República corren el riesgo de quedar en la letra muerta, y mi deseo como argentino es que tengan un cabal y total cumplimiento para bien del país.

Por eso creo que este tema de la amnistía tiene, de alguna manera, como Jano, dos caras: la del Estado, que sanciona esta ley no con espíritu de perdón —porque en ese caso habría que repetir palabras pronunciadas por Carlos Pellegrini en un debate memorable: «¿Quién perdona a quién?», y no estamos para abrir viejas heridas, sino para cerrarlas—, sino a través del organismo parlamentario; y la de quienes son los beneficiarios de la medida, que deben entender que éste no es un simple manto de olvido que se arroja sobre algunos hechos que han producido duros enfrentamientos, sangre y dolor en el país, sino que es también un acto de fe que todo el país hace a través de sus legítimos representantes, en que depondrán su actitud de extrema beligerancia y se sumarán generosa-

mente a la tarea de construir la Argentina moderna que nos está reclamando el pueblo.

Por eso, señores, nosotros, integrantes de partidos provinciales, electoralmente pequeños frente a los grandes padrones, estamos aquí haciendo nuestro modesto y humilde aporte a esta tarea.

Creemos que de hoy en más se inicia un nuevo estilo en las relaciones políticas argentinas. Ayer hemos participado de un acto solemne que ha contemplado con emoción todo el país, y particularmente los sectores mayoritarios que triunfaron limpiamente en la última elección. Nosotros aspiramos a que ese acto solemne sea el de clausura de un largo proceso de desencuentros, de enfrentamientos y de frustraciones que han demorado a nuestro país en el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas y espirituales. Y aspiramos también a que sea al mismo tiempo un punto de arranque hacia formas de convivencia más completas, más altas, más dignas, en las que no existan argentinos que miren con odios a otros argentinos, en las que no haya divisiones sobre la base de cuestiones emocionales referidas a un pasado que no podemos rescatar, y en las que nos reconciliaremos en la historia, cuando el tiempo transcurra, llevando serenidad a los ánimos y se pueda analizar con objetividad para darle a cada uno lo suyo; porque creo que absolutamente todos los sectores del país con mayores o menores errores o aciertos hemos hecho lo nuestro por la patria.

Señores: éstas son las razones por las cuales apoyamos, en general, el proyecto de la mayoría. Deseo que algún día podamos todos recordar fraternalmente que esta decisión fue el punto de arranque hacia la Argentina del porvenir que nos están reclamando nuestros hijos y que si no somos capaces de construir pesará sobre nuestras conciencias como una tremenda lápida de vergüenza y de oprobio. Nada más. (Aplausos.)

Sr. García (A. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. García (A. A.). — Quiero en una muy corta intervención, señalar la importancia que, a nuestro criterio, tiene esta ley de amnistía.

La ley que tratamos tiene la característica de cerrar, por una parte, un proceso político, y por la otra, de abrir, creando las condiciones necesarias, el proceso de reconstrucción nacional. Quiero afirmar, públicamente, mi total adhesión a las palabras del miembro informante de la mayoría, senador Martiarena, en el sentido de que es el fruto de un proceso de dieciocho años de duración, durante los cuales no estuvo plenamente vigente la Constitución Nacional.

Hago esta aclaración, señor presidente, porque quien habla, dentro de ese transcurso, fue gobernador de una provincia argentina, pero lo fue en instantes en que con una Constitución aparentemente vigente, había leyes proscriptivas

que marginaban a enormes sectores populares de la participación activa en la vida política argentina.

Por eso afirmamos que en 1958, en la presidencia de Arturo Frondizi y en la gobernación de San Juan de Américo García, existía, indudablemente, un elemento fundamental que le quitaba el término de estrictamente constitucional a estos gobiernos, por cuanto, para ello, había sido necesaria la proscripción de un gran sector popular que representaba el peronismo. (Aplausos.)

Por ello decimos, con toda valentía y franqueza, que éstos son algunos de los motivos por los cuales mi partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo, está incorporado por convicción, con serenidad y con sinceridad, al Frente Justicialista de Liberación. Y que esta falla que tuvo en materia constitucional el gobierno de Arturo Frondizi en la Nación y de Américo García en San Juan, la tuvo, también, el doctor Arturo Illia.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¡Illia no anuló elecciones!

Sr. García (A. A.). — ¿Por qué aceptamos, entonces, esas responsabilidades?

Las aceptamos con el criterio definido, tranquilo y responsable de que íbamos a ser capaces de poner al país definitivamente en la órbita constitucional. Pero fuimos truncados en el andar del tiempo, y ni unos ni otros terminamos ese proceso. Estos fueron, sin duda, factores enervantes también para un sector del pueblo: en 1957 la eliminación de la Constitución Nacional del 49 y en 1958 y 1963 la eliminación de este gran sector popular, creando un conjunto de condiciones en las cuales este gran sector se sintió desposeído de uno de sus principales derechos, el de intervenir activamente a través de su doctrina y de su pensamiento en la vida política argentina.

A eso sigue el proceso militar, que ya vuelve asfixiante el ámbito nacional. Las organizaciones políticas, de alguna manera, con sus dirigentes lucharon en todos los terrenos, y los jóvenes, con su pasión, con su impulso y con sus creencias, en otro terreno y desde otro punto de vista. Por eso, la ley de amnistía en este Senado nacional, donde están representadas todas las corrientes políticas argentinas menos el sector proscripto por la ley 17.401, que hoy será derogada, permite, sí, que sea auténtica la bilateralidad a que hacían referencia los señores senadores Muniagurria y Perette. La de 1958, sancionada por los senadores de mi partido, tenía el defecto de que la bilateralidad, como en el caso del año 1932, no podía realizarse porque la de 1932 era la coronación de un proceso del que había estado ausente el partido de Hipólito Yrigoyen, nuestro radicalismo; y en 1958 había estado ausente esta gran masa popular que representaba al Partido Peronista. (Aplausos.)

Con la misma valentía y lealtad yo digo a este Senado que esta ley de amnistía es la culminación de ese proceso que comenzó en 1955 y se vio coronado por el éxito en este momento. Y digo que en este momento sí pediremos la bilateralidad porque significa la iniciación de la gran reconstrucción nacional.

No he dicho nada que tenga ánimo polémico. He querido ser objetivo y destacar ahora mi sensación de que esta ley se inicia con el auspicio fundamental que implica un auténtico sentido de la unidad nacional, con la participación positiva de todos los bloques que constituyen este Senado de la Nación. (Aplausos.)

Sr. Jáuregui. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui. — Señor presidente, señores senadores: mucho se ha dicho ya en este debate para que podamos agregar alguna originalidad, pero los hombres congregados en la Confederación Popular Federalista, que representamos partidos eminentemente locales, autonomistas, estamos obligados a poner énfasis en algunos aspectos de esta discusión.

Venimos al tratamiento de esta ley imbuidos del espíritu de amnistía, y por ello no pretendemos rozar en revisión el proceso histórico argentino. Aspiramos a la curación de la salud de la República y no venimos a hacer la disección de las miserias argentinas. Concurrimos imbuidos de este espíritu para que esta coyuntura histórica permita que entre todos los argentinos concibamos y paramos esta patria, donde la libertad sea permanente para todos, donde haya vigencia para que los hombres cultiven cualquiera de sus convicciones, como bien se ha marcado acá.

Ese es el espíritu que traemos hoy, señor presidente. Por eso reitero que suscribo lo que han dicho los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, pero no adhiero a aquellas expresiones con las que se ha pretendido hacer la revisión de nuestra historia y, lo que es peor, justificar actitudes que en su momento a lo mejor no tuvimos la valentía de defender.

Señor presidente: la violencia tiene módulos que pueden ser justificados y creo que todos hemos ejercido la resistencia en distintas épocas. Así que esta amnistía que debe borrar todos esos dolores argentinos, no sólo debe ser una ley de olvido; considero que debe resultar una ley de perdón y de arrepentimiento.

En la Argentina se han sucedido hechos irreparables que no pueden olvidarse. Muchos no los podrán olvidar; tendremos que recurrir al perdón, porque ese perdón es una de las vocaciones más altas que ha dado Dios al hombre. Tenemos que recurrir al arrepentimiento porque todos, unos más, otros menos, somos responsa-

bles de este proceso histórico que, por fin, vemos hoy como una promesa de futuro, de paz y de tranquilidad.

Las leyes que suprimen la libertad del hombre deben ser eliminadas; no voy a discutir unas ni otras porque, en nuestro concepto, la libertad es una sola e indivisible. No aceptamos retaceos porque la suprimen definitivamente. O hay libertad suficiente o no hay libertad. El hombre argentino ha crecido y ha sembrado libertad en medio continente, y nuestro brazo, como el de todos, habrá de trabajar en el país por la libertad, pero también lo hará fieramente en la guerra si hay que defender esa libertad, porque es el ambiente natural de nuestro hombre argentino.

Como partido provincial, e interpretando el sentir de mis compañeros, quiero acentuar algo que ya se dijo en este recinto. La violencia no es nada más que el fruto de la violencia; pero en el país se ejercita una violencia cotidiana y permanente. Hay hombres que viven encarcelados sin haber estado jamás en la prisión; hay hombres que han muerto sin que su nombre figure en los periódicos; me refiero a los hombres de muchas de nuestras postradas regiones del interior, porque desde la Capital Federal, en insensibilidad, se ejerce una violencia que es, tal vez, la más deshumanizada de todas.

Ayer el excelentísimo señor presidente de la República daba cifras de la frustración argentina cuando hablaba de mortalidad infantil, de tuberculosis, de vivienda. Señores senadores: en muchas provincias a esas cifras hay que multiplicarlas por diez; los hombres del interior estamos sometidos a esa violencia que queremos que termine, porque el interior ha suministrado grandes soluciones a la República, pero que también llegue el momento de la rebeldía de toda esta Argentina olvidada.

Queremos que la violencia que se ejecuta en distintos aspectos se suprima por igual para todos los argentinos y que los hombres que tienen los controles del poder desde el puerto recuerden que allá también existen argentinos que están sometidos a condiciones mucho más humillantes y mucho más violentas, porque, reitero, se ejercitan todos los días. Tenemos hombres que no alcanzan a vivir porque mueren en su infancia; hay gente que está condenada a ser prisionera del hospital porque la salud está por debajo de lo que puede considerarse normal.

Ante esa violencia, señor presidente y señores senadores, realizamos este reclamo federalista para que a las provincias se las tenga en consideración.

Adherimos a las palabras pronunciadas en la Asamblea Legislativa de esta mañana por el señor presidente de Chile, pero reducimos ese concepto a nuestro ámbito provincial: provincianos que habremos de venir en paz a colaborar en la grandeza, en la tranquilidad y en la salud de la República olvidándonos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por lo malo que hicimos y por

lo que dejamos de hacer. Pero así, también con valentía y con fiereza, vendremos para que la Argentina sea única e íntegra y para que todos aquí, los de la ciudad y los del interior podamos vivir en amplitud y podamos ser artífices de nuestro destino y no encarcelados de la explotación que, desde algunos sectores, se hace con respecto a las provincias.

Queremos la igualdad, queremos la libertad. Yo estoy seguro de que la violencia desaparecerá de esa manera, así como también la que surge en respuesta a ella, porque el hombre vivirá en libertad, en posibilidad. Y entonces la Argentina será grande, brindará felicidad a su pueblo e iluminará a la América morocha que, como bien se ha dicho, está sedienta de un faro que le marque el camino que corresponde a este inmenso continente que, a su vez, está expoliado por otros sectores del mundo.

La Argentina tiene una tremenda responsabilidad histórica, una tremenda responsabilidad americana; pero tiene también una tremenda responsabilidad argentina. Y por ello, señores senadores, pido que volvamos nuestra mirada hacia lo que siempre ha estado a nuestras espaldas, que miremos al interior, y así habremos colaborado, habremos integrado, habremos ampliado las bases de esta amnistía que tiene por finalidad la paz, la grandeza y la felicidad del pueblo argentino. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Herrera (J. J.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Herrera (J. J.). — Señor presidente: ante todo voy a pedir a los compañeros de mi bloque me disculpen por hacer uso de la palabra en estos momentos, pero no quedaría en paz mi conciencia si, como representante de la provincia de La Rioja, no expusiera mis causas y los fundamentos de mi apoyo a esta magnífica ley de amnistía que se está tratando en estos momentos.

La Rioja, provincia preñada de hechos históricos, ha tenido hombres como El Chacho, Facundo y Felipe Varela, que fueron asesinados y mancillados por el solo hecho de haber defendido el federalismo y haber defendido una causa justa contra el avasallamiento de las potencias extranjeras que pretendían adueñarse de nuestras riquezas. La Rioja ha sufrido el exterminio de sus hijos, hasta el punto que ha llegado a decirse que había que exterminarlos porque su sangre era abono necesario para la tierra.

La historia se repite, señor presidente, y en estos momentos la República Argentina está sufriendo un proceso exactamente igual al de aquellas épocas. Nuestros jóvenes, por el solo hecho de defender una causa justa, de ser acusadores de actos cometidos por agentes de un gobierno de facto —secuestros y asesinatos—, han sido perseguidos y masacrados. Nuestros jóvenes, por el solo hecho de haber pretendido evitar el continuismo de un sistema capitalista

que sumió al país en un estado de cosas que se hizo intolerable, han sido masacrados. (*Aplausos.*)

Se ha querido imponer una mentalidad conformista, de un sistema liberal, para evitar que la mentalidad de una nueva Argentina, que ya está en potencia y que ya está actuando, logre el acceso del pueblo al poder. Y lo que es peor, señor presidente, se ha querido proscribir a la mayoría del pueblo argentino que ha reventado las urnas el 11 de marzo.

Exactamente igual que en aquel entonces este gobierno de facto habrá creído, tal vez, que la sangre de nuestros jóvenes era abono necesario para la tierra, y por eso no la economizó.

Por eso, señor presidente, como riojano, como representante de esa provincia postergada, humillada y empobrecida, pero que sabe llevar con orgullo su pobreza, voy a dar mi voto afirmativo para esta ley que, estoy seguro, está latiendo en todo el país en un anhelo que estalla en el corazón de todos los argentinos y que sintetizo en tres palabras: paz, justicia y reencuentro.

Nada más. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley de amnistía

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Caro. — Pido la palabra.

Visto el resultado unánime de la votación pido al señor presidente que invite a los señores senadores y al público a ponerse de pie, porque esta sanción es la más rotunda réplica para aquellos que, en una trasnochada aventura de cesarismo, rompieron el orden institucional. Dejo constancia de que este pedido interpreta la voluntad unánime de las provincias que integran este Senado federal. (*Aplausos.*) Que este aplauso, señor presidente, sea el saludo alborozado anunciador de una nueva etapa que se inicia en el Parlamento argentino.

Sr. Presidente. — Habiendo sido sancionada por unanimidad la ley de amnistía, invito a los señores senadores y al público a ponerse de pie en homenaje a la paz de la República.

—Así se hace. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente y señores senadores: el sector de la Unión Cívica Radical ha fijado en el debate en general, y a través de los dos proyectos que ha presentado, cuáles es su criterio, cuáles son sus reflexiones, iniciativas y observaciones para mejorar estos estatutos. Para

no reproducir un nuevo debate me remito a cada uno de los artículos que hemos observado en general; ateniéndonos, como digo, a esos planteamientos, como también a los proyectos presentados en los cuales se fija la opinión de nuestro sector. De esta manera, nosotros, que hemos aprobado por unanimidad esta iniciativa, dejamos hechas las salvedades pertinentes; para evitar un nuevo debate en particular nos remitimos a las opiniones ya mencionadas que, en definitiva, sustentan el criterio que hemos adoptado cuando se produjo el voto en el debate de amnistía en el año 1958.

Dejo así fijado el criterio de la Unión Cívica Radical con respecto al tratamiento en particular, y le digo al señor senador doctor García que no es éste el momento de rebatir algunas de sus consideraciones. Cuando llegue ese momento lo haremos con todo gusto, ya que no es ésta la oportunidad de la lucha partidista sino la de las grandes soluciones nacionales.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Vivas. — En nombre del grupo de senadores integrado por Frígoli, del Partido Demócrata de Mendoza; Mancini, del Partido Autonomista Liberal de Corrientes; Bravo, del Partido Bloquista de San Juan, y del que habla, del Movimiento Popular Provincial de San Luis, hemos presentado un proyecto en común, en el que coincidimos con el proyecto del Poder Ejecutivo en general; pero como hay discrepancias con el artículo primero por los argumentos ya expresados por representantes de la minoría —a los que adhiero—, quiero expresar que, en relación a dicho artículo, nos remitimos al contenido de nuestro proyecto.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Con relación al artículo 1º, reitero mi observación de que sea corregido «24» por «25» de mayo de 1973, por las razones que he dado anteriormente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º, con la corrección formulada por el señor senador.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Caro. — Pido la palabra.

Como obran en poder de los señores senadores los proyectos respectivos, formulo indicación para que simplemente se enuncien por Secretaría los distintos artículos y, en caso de no ser observados, se den por aprobados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Así se hará.

—Se enuncia el artículo 2º.

7

AMNISTIA EN EL AMBITO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Sr. Presidente. — De acuerdo con la votación realizada corresponde considerar el proyecto de declaración que se refiere a amnistía en el ámbito provincial y municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de declaración, que figura en la página 87.

Sr. Allende. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Allende. — Señor presidente: el miembro informante de la mayoría, al referirse en general al proyecto, advirtió que las sanciones de tipo administrativo que pudieran haber afectado a agentes de la administración pública, en el nivel de las provincias o de las municipalidades, no estaban contenidas en el proyecto por una razón de ordenamiento institucional. El bloque mayoritario interpreta que es voluntad unánime de este Honorable Senado —y ése es el sentido de su votación— que no quede fuera de la órbita de los beneficios de la ley ninguna sanción que pueda originarse en alguno de los hechos cuya desincriminación se obtiene por virtud de esta norma.

El Senado no tiene facultades para introducir en la ley el levantamiento de sanciones administrativas que corresponden a los órdenes provincial y municipal, pero como en este recinto se sientan todas las fuerzas políticas que tienen igual ubicación en los órganos legislativos provinciales y en las respectivas competencias municipales, el bloque de la mayoría a que pertenezco, por unanimidad de sus miembros, ha presentado un proyecto de declaración, cuya lectura voy a hacer en seguida, procurando expresar el anhelo de que en esas respectivas jurisdicciones y competencias se dicten disposiciones análogas que hagan alcanzar para sus actos de competencia los beneficios de los artículos 3º, 4º y 5º del proyecto que acabamos de aprobar.

Creo que, sin excepción, y en particular para los legisladores de las provincias, tiene que resultar particularmente grata esta expresión de anhelo, porque quien más o quien menos —y yo como cordobés, en particular—, hemos sido testigos de episodios de violencia de gran resonancia, en los cuales esa violencia, que asustó a muchos, ha tenido simplemente el valor instrumental de una problemática de fondo que algún día podrá ser motivo de debate porque soy un convencido de que la violencia, en nuestro país, es un cargo de conciencia que pesa en toda su clase dirigente, política o no política, y el aplauso unánime y de pie que aquí se ha dado es el alivio espiritual que corresponde a una conciencia que se limpia.

Voy a leer el texto de la declaración que hemos presentado:

«El Senado de la Nación declara:

»Que estima justo que los beneficios de la amnistía, según el proyecto de ley que acaba de aprobar, alcancen, sin excepciones, a todos aquellos que se encuentren afectados por alguno de los hechos cuya corrección se procura.

»Por consiguiente, el Senado de la Nación expresa su anhelo de que los poderes legislativos provinciales y los organismos municipales de todo el país sancionen con urgencia normas que traduzcan en sus respectivas jurisdicciones, los beneficios de los artículos 3º, 4º y 5º para los hechos allí legislados, en cuanto correspondan a su competencia.»

Sr. León. — Pido la palabra.

Creo que los políticos tenemos hoy un duro desafío: crear un mundo argentino moderno y más justo.

Tal vez, el principal desafío sea recuperar el federalismo, que, con sus luchas, posibilitó la organización nacional. Creo que en esto llegamos un poco tarde, porque todos los sectores políticos que integran las distintas municipalidades y legislaturas, animados de una misma vocación común de pacificación, se están expidiendo sobre este tema.

Pero, de todas maneras, suponemos que este proyecto que se propone es un anticipo de que este Senado, al margen de la declaración teórica de esta tarde, ha de dictar después las leyes federales substanciales para nuestras provincias en lo que hace a presupuesto, salud o educación. Con este ánimo de afirmación y respeto al federalismo argentino es que vamos a apoyar íntegramente el proyecto de declaración.

Sr. Presidente. — Si ningún señor senador va a hacer más uso de la palabra, se va a votar el proyecto de declaración.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de declaración.

8

DEROGACION DE NORMAS PENALES

(Consideración en particular)

Sr. Presidente. — En consideración, en particular, el proyecto de ley de derogación de normas penales. (Punto II de los Asuntos Entrados.)

Sr. Caro. — Propongo que se aplique el mismo criterio que en el proyecto anterior, es decir, que solamente se enuncien los artículos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — En consideración el artículo 1º.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: mi bloque recoge la inquietud que ha expresado el señor senador De la Rúa, acerca de que al tiempo de

aplicarse el artículo 1º de esta ley pudiera suponerse que, de cierta manera, delitos contemplados en algunas de las leyes que derogamos ahora queden prácticamente sin legislación penal y rota la continuidad jurídica que respecto de esos hechos debe existir. Nos referimos especialmente al caso que ha señalado el señor senador de la Rúa, sobre negociaciones con inmuebles, por ejemplo, que están en trámite de proceso. De acuerdo con la norma derogatoria podría entenderse que ese proceso se cierra y no podría renacer después en virtud de la sanción que damos en el artículo 4º. Estimo que ése es el planteo que ha hecho el señor senador de la Rúa.

Sr. de la Rúa. — Me he referido también a algunos otros casos no previstos.

Sr. Martiarena. — Con el ánimo de evitar ese tipo de interpretaciones que serían contrarias al interés colectivo, propongo que se agregue una frase que diga en el primer párrafo «salvo lo que dispone el artículo 4º de esta ley», con lo cual el párrafo quedaría redactado en la siguiente forma: «A partir de la entrada en vigencia de esta ley perderán toda eficacia las disposiciones por las que se hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes, y que no hayan emanado del Congreso Nacional, cualquiera sea el nombre que se le haya dado al acto legisferante por el que se las dictó, salvo lo que dispone el artículo 4º de esta ley.»

Con ello nos remitimos a nuestra propia sanción, que está convalidando normas del Código Penal.

Sr. de la Rúa. — Creo que ese agregado ayuda pero no soluciona el problema, que subsiste, porque el artículo 4º dice «convirtiéndose en ley...». De todos modos, es un paso adelante, y reconozco el gesto del señor senador, que ha procurado buscar solución al problema.

Sr. Martiarena. — Estima mi bloque que, con el agregado que proponemos y con las manifestaciones concordantes del señor senador, habrá materia para que al tiempo de aplicarse la ley no puedan evadirse las situaciones que el señor senador ha previsto. Por lo tanto, mantenemos la proposición de ese agregado.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Ratifico los conceptos del señor senador de la Rúa y entiendo que cuando el señor senador dice que lo dicho debe servir de base para la futura labor judicial también deja a salvo mi criterio. En consecuencia, debe entenderse que en estas leyes no están comprendidos ni liberados de ninguna manera delitos económicos, ni vaciamiento de empresas, usura, el caso de la venta de departamentos y otras gamas delictuales semejantes.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

La cuestión que plantea el señor senador Perette queda remitida al artículo 4º, en el que expresamente se da validez a disposiciones del

Código Penal y leyes especiales, que quedan así en plena vigencia, máxime con el agregado que ya contiene el artículo 1º: «Aclárase que recuperan su vigencia las normas en vigor al momento de dictarse las que pierden ahora eficacia.»

Por eso mi bloque insiste en el agregado que he propuesto y solicita que se apruebe el artículo 1º, con el mismo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º con el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 2º y 3º.

—Al enunciarse el artículo 4º, dice el

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Considero que en el artículo 4º se ha incurrido en un error de fecha, pues se mencionan las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo de facto «entre el 26/6/66...», cuando debería ser «28/6/66...». Debe ser un error de copia.

Sr. Presidente. — Se trata, evidentemente, de un error de copia.

Sr. Caro. — Estimo correcto, desde el punto de vista gramatical, la enunciación de la fecha completa, es decir: 28 de junio de tal año, y no 28/6/66.

Sr. Presidente. — Se tendrá presente, señor senador. Se va a votar el artículo 4º con la rectificación propuesta por el señor senador por Jujuy.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 5º.

—El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto. Se comunicará de inmediato a la Honorable Cámara de Diputados.

9

ESTABLECIMIENTO DE GARANTIAS PROCESALES

(Consideración en particular)

Sr. Presidente. — Se va a votar en particular el proyecto de ley que trata sobre el establecimiento de las garantías procesales y de la ejecución penal. (Punto III de los Asuntos Entrados.)

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 1º.

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Solicito que en este artículo se incluya la palabra «magistrados» antes de «funcionarios»;